



Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2024

C. SOLICITANTE

PRESENTE

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, realizó solicitud a la que correspondió el folio 330029724000550, en la que requiere lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información

Entrega por internet en la PNT

Transcripción de la solicitud de información

"La que se describe en archivo adjunto relativa a separación de ejidatarios:" (sic)

1. Trámite de la solicitud

La Unidad de Transparencia es el área competente para darle trámite a su solicitud, y por la naturaleza de lo que pide saber, fue necesario turnar su petición a la **Secretaría General de Acuerdos**, así como, **a los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 07 y 08, con sede en Durango, Durango y en la Ciudad de México, respectivamente**, áreas jurisdiccionales que poseen o generan la información y a la que les corresponde conocer del requerimiento efectuado.

2. Información remitida por los órganos jurisdiccionales requeridos

En relación a lo solicitado la **Secretaría General de Acuerdos**, informó lo siguiente:

*"En razón de lo expuesto, cabe destacar que la persona solicitante indica respecto de la **Contradicción de Tesis 1/2002**, del índice de este órgano jurisdiccional, contiene las **tesis** que menciona en su solicitud, mismas que se encuentran publicadas en el Boletín Judicial Agrario número 120, del mes de octubre de dos mil veintidós, como se muestra con las siguientes imágenes:*



ESTADO DE MÉXICO

CONTRADICCION DE TESIS: 01/2002

Dictada el 12 de septiembre de 2002

ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL UNITARIO DEL DISTRITO 10, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO Y EL TRIBUNAL UNITARIO DEL DISTRITO 7, CON SEDE EN DURANGO, DURANGO, AL RESOVER LOS JUICIOS AGRARIOS 232/97 Y 80/97, RESPECTIVAMENTE.

PRIMERO.- Sí existe Contradicción de Tesis ente las sustentadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México y por su similar del Distrito 7, con sede en la Ciudad de Durango, Estado de Durango, al resolver los juicios agrarios 232/97 y 80/97, respectivamente.

SEGUNDO.- De conformidad a los razonamientos expuestos en el apartado de considerandos del presente fallo, se establece con carácter de jurisprudencia los criterios que sustenta este Tribunal Superior y que son del tenor siguiente:

"PERDIDA DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO Y SEPARACION DE EJIDATARIO POR LA ASAMBLEA GENERAL, SU DIFERENCIA PARA EFECTOS DE INTERPRETACIÓN POR LOS TRIBUALES AGRARIOS. El artículo

23, fracción II, de la Ley Agraria, establece la facultad exclusiva de la Asamblea General de Ejidatarios para conocer y determinar sobre la separación de sus miembros, disposición que debe ser interpretada de manera armónica con el artículo 10 del mismo ordenamiento legal, que dispone que los ejidos operarán de acuerdo con su reglamento interno, debiendo contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, entre ellos los requisitos para la admisión de nuevos ejidatarios y las demás que el núcleo agrario considere pertinentes. De la interpretación de ambas disposiciones, se pretende desprender que la separación de ejidatarios es una facultad exclusiva de la asamblea general del núcleo agrario, la que deberá apoyarse en las disposiciones que se contengan en su reglamento interno, el cual, tiene carácter de obligatorio para los miembros que conforman el ente agrario, toda vez que éste debe ser aprobado por la propia asamblea general, sin que contravenga los principios elementales de derecho que estatuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamiento legales que de ella emanen. En contraposición, el artículo 20 de la Ley Agraria, establece las causas por las cuales se pierde la calidad de ejidatario, a saber: Por cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes; por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del núcleo de población, o por prescripción negativa, cuando otra persona adquiera sus derechos en términos del artículo 48, de la misma ley; es decir que, contrario a lo que ocurre en la separación de ejidatarios, la pérdida de derechos no requiere formalmente intervención de la asamblea general, sino que, estas se refieren a la acción u omisión individual del interesado. Debiendo destacarse que la determinación de la asamblea en cuanto a la separación de uno de sus miembros, es susceptible de

impugnación ante los tribunales agrarios, por los terceros que consideran afectados sus derechos, siendo obligación de los órganos jurisdiccionales especializados resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la determinación de la asamblea. Luego entonces, las hipótesis jurídicas de separación y pérdida de derechos agrarios son diferentes y por tanto, las causas de pérdida de derechos de ejidatarios que refiere el artículo 20 de la Ley Agraria no son limitativas de las causas de separación de ejidatarios.

SEPARACION DE DERECHOS AGRARIOS, CAUSAS DE.- De conformidad al artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria, es facultad exclusiva de la asamblea general de ejidatarios o comuneros la separación de los integrantes del ente agrario, precepto legal que en armonía con el artículo 10, del mismo ordenamiento, las causas de aceptación y separación de sus miembros deben estar plasmadas en su reglamento interno y en caso de no existir, éstas deben estimarse por el buen juicio del propio núcleo agrario, sin contravenir disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamientos legales que de ella emanen. Las causas de pérdida de derechos establecidas en el artículo 20 de la ley de la materia, válidamente pueden invocarse como causa de separación, según sea el caso, ya que la renuncia implica la voluntad del ejidatario o comunero a separarse del ente agrario, al igual que la cesión de derechos parcelarios y comunes de ejidatario; y el supuesto de la prescripción negativa, se traduce en el abandono de tierras, causas que pueden ser sometidas a la consideración de la asamblea general, tendiente a la separación de ejidatario, con excepción de la última, que debe ser motivo de pronunciamiento jurisdiccional en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, sin que los

motivos de pérdida derechos establecidos en el artículo 20 del mismo ordenamiento, sean limitativos para la separación de ejidatarios, y

ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS O COMUNEROS, FACULTAD DE LA PARA DETERMINAR LA SEPARACIÓN DE SUS INTEGRANTES.- Con motivo de la Reforma al artículo 27 Constitucional, decretada el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis del mismo mes y año, se instituyeron los Tribunales Agrarios para la administración de justicia agraria en general, dando lugar a la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y promulgación de la Ley Agraria y su Ley Orgánica, publicadas en el mismo órgano de difusión oficial del veintiséis de febrero del mismo año. En la Exposición de Motivos de la Ley Agraria, particularmente, en el rubro "el ejido y los ejidatarios", se expresa que "...Los núcleos de población ejidal o comunal demandan autonomía y libertad. Por ello la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de transformación institucional que persigue la iniciativa. En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se concibe como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. La Asamblea General, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales. ...". La motivación anterior da base, entre otros, al artículo 23 de la Ley Agraria, que

establece la facultad exclusiva de la asamblea para determinar la separación de los integrantes del núcleo agrario. De lo antes expuesto, se concluye que en la ley vigente, se faculta a la asamblea general a decidir de manera exclusiva sobre las cuestiones que refiere dicho precepto legal, entre ellas, de la separación de ejidatarios, otorgando autonomía y libertad al órgano supremo del ejido para resolver al respecto, con la única limitante, de motivar sus decisiones con pruebas suficientes que sustentan su determinación, dando oportunidad de defensa al posible afectado, como así lo ha sostenido el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al establecer la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Septiembre-Octubre, 1994, Página 269, cuyo rubro dice: "**ASAMBLEAS DE EJIDATARIOS. FACULTADES DE LA PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA SEPARACIÓN DE LOS EJIDATARIOS DEBE APOYARSE EN PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL ABANDONO DE TIERRAS.**"; debe destacarse que en el cuerpo normativo que rige la materia Agraria, no existe disposición que establezca las causas de separación de ejidatarios o comuneros, como ocurría en la derogada Ley Federal de Reforma Agraria; sin embargo, dada la autonomía de los núcleos de población ejidal o comunal en cuanto a su organización y vida interna, la que de conformidad al artículo 10 de la Ley Agraria operarán de acuerdo a su reglamento interno, sin mas limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley, ordenamiento interno en el que deben establecerse las causas de separación al igual que las de aceptación, al que todos los integrantes del núcleo agrario están sujetos, ya que dicho Reglamento debe ser sancionado y aprobado por el máximo órgano del núcleo agrario, así como sus modificaciones, tal y como lo dispone la fracción I del artículo 23 de dicha ley; y en el supuesto de no contar con reglamento interno, las causas de separación deben estimarse por el propio núcleo, sin contravenir las

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamientos legales que de ella emanen, cuya determinación deberá sujetarse a la oportunidad de defensa del posible afectado, y prueba suficiente que la sustente.

TERCERO.- Publíquense los puntos resolutivos del presente fallo en el *Boletín Judicial Agrario*.

CUARTO.- Con testimonio del presente fallo, hágase del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios en contradicción y con copia certificada a los demás Tribunales Agrarios del país; y devuélvanse los autos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7 con sede en la Ciudad de Durango, Estado de Durango.

QUINTO.- Con testimonio de esta resolución, hágase del conocimiento de la Procuraduría Agraria y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de cuatro votos y uno en contra del Magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

*Ahora bien, tomando en consideración que este Tribunal Superior Agrario, resulta ser responsable de los **datos personales** y, en su caso, el encargado del tratamiento que deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los mismos mediante acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, por lo que debe tener un estricto control sobre los datos personales que obren en sus archivos, debiendo sistematizarlos únicamente con base en criterios relacionados con el ejercicio de sus funciones, de tal manera que esos datos podrán consistir en nombres, domicilio, antecedentes patrimoniales, planos, etc.; por lo que, para efectos de otorgar la información requerida, se **proporcionar versión pública** de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 118 al 120 de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

*En atención a la solicitud formulada, anexo al presente la versión pública de la resolución relativa a la citada **Contradicción de Tesis 1/2002**, dictada el doce de septiembre de dos mil dos, por este órgano jurisdiccional; misma que se remite para **aprobación** del Comité de Transparencia, en términos del artículo 141 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública."*

Por su parte, el **Tribunal Unitario Agrario del Distrito 07**, comunicó que:

*"Al respecto hago de su conocimiento que una vez hecha una búsqueda en el área de archivo se localizó el expediente agrario **80/97** mismo que contiene la sentencia de tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, la cual se anea al presente." (sic)*

Asimismo, el **Tribunal Unitario Agrario del Distrito 08**, manifestó lo siguiente:

"...en atención a la solicitud me permito enviar la versión pública de la sentencia dictada el 15 de enero de 1997 en el expediente 232/97 índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10." (sic)

3. Clasificación de información por el Comité de Transparencia

La clasificación de la información es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder y materia de solicitud actualiza alguna de los supuestos de reserva o confidencialidad, cuestión que debe ser analizada por el Comité de Transparencia al ser el órgano colegiado facultado, conforme a un análisis caso por caso.

i) **CONTRADICCIÓN DE TESIS 01/2002**

En tal virtud se le comunica que, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información de los Tribunales Agrarios, en su **trigésima segunda sesión extraordinaria** –celebrada el veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro- por unanimidad de votos confirmó que la información requerida sobre la versión pública de la resolución de contradicción de tesis **01/2002**, de doce de septiembre de dos mil dos, del índice del Tribunal Superior Agrario, se trata de información confidencial al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los argumentos y fundamento en los que se sustenta la clasificación respectiva –en términos de lo señalado en el artículo 97 de la Ley Federal en cita- están expuestos dentro de la resolución **5.1/EXT/32.2024**, así como en el **ACTA/C.T./32-EXT/2024** de la sesión señalada del Comité de Transparencia, misma que forman parte integral de la presente respuesta y que pueden ser consultada de manera pública en términos del artículo 70, fracción XXXIX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el portal de transparencia de los Tribunales Agrarios, en la dirección siguiente:

- Acta: <https://transparencia.tribunalesagrarios.gob.mx/images/PDF/COMITE/2024/ACTA-CT-32-EXT-2024.pdf>
- Resolución: https://transparencia.tribunalesagrarios.gob.mx/images/PDF/COMITE/2024/RESOLUCIN_51-EXT-322024.pdf

ii) JUICIO AGRARIO 080/97

Asimismo, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información de los Tribunales Agrarios, en su **trigésima segunda sesión extraordinaria** –celebrada el veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro- por unanimidad de votos confirmó que la información requerida sobre la versión pública de la sentencia de tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dentro del expediente del juicio agrario **080/97**, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 07, con sede en Durango, Estado de Durango, se trata de información confidencial al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los argumentos y fundamento en los que se sustenta la clasificación respectiva –en términos de lo señalado en el artículo 97 de la Ley Federal en cita- están expuestos dentro de la resolución **5.2/EXT/32.2024**, así como en el **ACTA/C.T./32-EXT/2024** de la sesión señalada del Comité de Transparencia, misma que forman parte integral de la presente respuesta y que pueden ser consultada de manera pública en términos del artículo 70, fracción XXXIX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el portal de transparencia de los Tribunales Agrarios, en la dirección siguiente:

- Acta: <https://transparencia.tribunalesagrarios.gob.mx/images/PDF/COMITE/2024/ACTA-CT-32-EXT-2024.pdf>
- Resolución: https://transparencia.tribunalesagrarios.gob.mx/images/PDF/COMITE/2024/RESOLUCIN_52-EXT-322024.pdf

iii) JUICIO AGRARIO 232/97

Por su parte, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información de los Tribunales Agrarios, en su **undécima sesión ordinaria** –celebrada el doce de noviembre de dos mil veinticuatro– por unanimidad de votos confirmó que la información requerida sobre la versión pública de la sentencia de quince de enero de mil novecientos noventa y nueve, dentro del expediente del juicio agrario **232/97**, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, en ese momento con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se trata de información confidencial al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 113, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los argumentos y fundamento en los que se sustenta la clasificación respectiva –en términos de lo señalado en el artículo 97 de la Ley Federal en cita– están expuestos dentro de la resolución **5.2/ORD/11.2024**, así como en el **ACTA/C.T./11-ORD/2024** de la sesión señalada del Comité de Transparencia, misma que forman parte integral de la presente respuesta y que pueden ser consultada de manera pública en términos del artículo 70, fracción XXXIX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el portal de transparencia de los Tribunales Agrarios, en la dirección siguiente:

- Acta: <https://transparencia.tribunalesagrarios.gob.mx/images/PDF/COMITE/2024/ACTA-CT-32-EXT-2024.pdf>
- Resolución: https://transparencia.tribunalesagrarios.gob.mx/images/PDF/COMITE/2024/RESOLUCIN_52-ORD-112024.pdf

4. Posibilidad de recurrir

Si usted no está de acuerdo con la respuesta otorgada, podrá interponer por sí o a través de su representante, de manera directa, por escrito, por correo con porte pagado o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o ante esta Unidad de Transparencia; dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.

5. Fundamento

Todos los actos de los Tribunales Agrarios se sustentan en la ley, por lo que el quehacer de esta unidad, la competencia de las áreas a las que se solicitó la información, el trámite, el tipo de respuesta, la



modalidad preferente de entrega, la disposición de la información, y la posibilidad de recurrir, se fundamenta en los artículos 9, fracción V, y 32 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Tribunales Agrarios y Protección de Datos Personales; Sección IX, Áreas Administrativas, Apartado I, Secretaría General de Acuerdos y Capítulo III Tribunales Unitarios Agrarios Sección I, De la integración de los Tribunales Unitarios Agrarios, del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios¹; 132, 133, 142 y 148 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 61, 128, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Estamos para servirle y le agradecemos su interés por obtener información pública.

A t e n t a m e n t e



Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información

¹ Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.

73

**CONTRADICCION DE TESIS 01/2002
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL
UNITARIO DEL DISTRITO 10, CON SEDE EN
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO Y EL
TRIBUNAL UNITARIO DEL DISTRITO 7, CON SEDE EN
DURANGO, DURANGO, AL RESOLVER LOS JUICIOS
AGRARIOS 232/97 Y 80/97, RESPECTIVAMENTE.**

México, Distrito Federal, doce de septiembre de dos mil dos.

MAGISTRADO PONENTE: LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA

SECRETARIO: LIC. JOSE LUIS GALAN DIAZ

V I S T O para resolver el expediente C.T.1/2002, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Subprocurador General Agrario, en funciones de titular de dicho Organismo Descentralizado con fundamento en el artículo 86 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, respecto a la presunta Contradicción de Tesis sustentadas entre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México y su similar del Distrito 7, con sede en la Ciudad de Durango, Estado de Durango, al resolver los juicios agrarios 232/97 y 80/97, respectivamente; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Mediante oficio de veintiocho de febrero de dos mil dos, el Subprocurador General Agrario, Gilberto José Hershberger Reyes, formuló ante este Tribunal Superior Agrario, denuncia de contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 y por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, en los términos siguientes:

“...1.- Por sentencia de 3 de noviembre de 1997, el Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito, con sede en la Ciudad de Durango, Durango, resolvió el expediente 80/97, promovido por el C. [REDACTED] y otros en contra de la Asamblea de Ejidatarios del Poblado “[REDACTED]”, Municipio de Guanaceví, Estado de Durango.

En el expediente arriba precisado (Considerando Tercero, página 11 de la sentencia), la litis quedó fijada en la determinación de si era procedente la acción principal ejercitada por los actores y que consistía en la nulidad del Acuerdo de la Asamblea celebrada en el ejido

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

demandado el 2 de febrero de 1997 y mediante el cual se determinó separar a los actores como ejidatarios del ejido [REDACTED], Municipio de Guanacevi, Estado de Durango; en la inteligencia de que, el Tribunal del conocimiento debería también declarar si los derechos agrarios de los demandantes como ejidatarios del referido ejido continuaban o no vigentes.

En la sentencia en cuestión se resuelve, por una parte, que los actores no demostraron la procedencia de su acción principal, relativa a la nulidad del Acuerdo de Asamblea que determinó su separación como ejidatarios del Poblado antes mencionado y, por otra, que era procedente que se diera cumplimiento al Acuerdo de la Asamblea de 2 de febrero de 1997, que dispuso la separación de los demandantes como miembros del ejido demandado.

En el Considerando Cuarto, página 18 de la resolución antes precisada, el Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito esgrimió el argumento que enseguida se transcribe:

“Además, es de explorado derecho que la asamblea como órgano supremo del ejido, tiene facultades para separar a los ejidatarios cuando hayan abandonado por más de cuatro años el cultivo que les correspondía en la explotación colectiva de las tierras del ejido al que pertenezcan y según quedó demostrado, la asamblea tomó en consideración para separar a dichos ejidatarios que habían abandonado el núcleo de población desde hace aproximadamente ocho años, tiempo en el que también abandonaron el cultivo que les correspondía en la explotación colectiva de la tierra ejidal. Por ende, debe tenerse que el acuerdo de asamblea con que se separó del ejido a los referidos ejidatarios, no se hizo contraviniendo a la ley agraria, sino de conformidad a lo dispuesto en la fracción II de su artículo 23.

El criterio preinserto con antelación, es sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la tesis que lleva por rubro el de:

“ASAMBLEAS DE EJIDATARIOS, FACULTADES DE LA. PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA SEPARACION DE LOS EJIDATARIOS DEBE APOYARSE EN PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL ABANDONO DE TIERRAS. Amparo directo 202/94.- José Luis Arias Arellano.- 24 de mayo de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Faustino Cervantes León.- Secretaria: Nora María Ramírez Pérez. Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Epoca 8ª, Vol. Tomo XIV-septiembre de 1994, Pág. 269, Núm. Tesis o Clave X 1º. 18A.

Copia simple del fallo de referencia se agrega al presente como anexo 1

2.- Por sentencia de 15 de enero de 1999, el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resolvió el expediente 232/97 promovido por el C. [REDACTED] en nombre y representación del C. [REDACTED]

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

██████████, en contra de la Asamblea de Ejidatarios del Ejido ██████████
██████████, Municipio de Naucalpan, Estado de México.

En el expediente del Juicio Agrario 232/97 (Considerando Tercero, página 18 de la sentencia), la litis se fijó en la determinación de si, de acuerdo con lo que dispone la fracción VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede la declaración de nulidad del Acuerdo de Asamblea de 28 de mayo de 1995 que determinó la separación del ejido en cita del finado ██████████ y la de sus sucesores.

En la sentencia de mérito, el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito resolvió procedente la demanda interpuesta y declaró nulo el Acuerdo cuya validez se impugnó.

El Considerando Sexto, páginas 23 y 24 de la resolución de referencia, estableció que:

“Con las pruebas que aportó la parte demandada anteriormente analizadas y valoradas, acredita que mediante Asamblea de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se determinó separar a ██████████ y a sus sucesores del ejido en cuestión, manifestando que a tal situación se aplicó el Reglamento Interno del Ejido que entró en vigor el veintiocho de marzo de ese mismo año, de acuerdo con el artículo 23 fracción II de la nueva Ley Agraria vigente, en relación con el artículo 21 inciso c) de dicho Reglamento, el cual reza lo siguiente: PARA TODO EJIDATARIO POR FALTA INJUSTIFICADA SE LES SANCIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA: C) TERCERA FALTA, SE LE SEPARA DEL EJIDO. Por otra parte el artículo 23 del mismo Reglamento indica: LOS NUEVOS TITULARES POR FALLECIMIENTO Y POR SUCESION SE LES ENTREGARA EL BENEFICIO, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTEN SU TRASLADO DE DOMINIO Y QUE HAYA PROCEDIDO A LO QUE LA ASAMBLEA ACUERDE, sin embargo se puede considerar que en el caso concreto no procedía la separación de ██████████ y sus sucesores del ejido en cuestión, toda vez que si bien es cierto que es facultad de la Asamblea de Ejidatarios determinar sobre la aceptación o separación de los mismos, también lo es que las disposiciones que se encuentran incluidas en su Reglamento Interno no pueden sobrepasar las disposiciones de la Ley Agraria, es decir, en el artículo 20 de la misma se nos señalan las causas por las cuales puede perderse la calidad de ejidatario y en ningún momento se señala como causa que el ejidatario no asista a las Asambleas durante tres asambleas consecutivas sin causa justificada...”.


Copia simple de la resolución de referencia se acompaña como anexo 2.

De conformidad con lo expuesto en los dos apartados que anteceden, se estima que existe una contradicción de tesis entre lo resuelto por el Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito en el expediente 080/97 y lo que resolvió el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito en el



CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

Juicio Agrario 232/97; ya que, si bien es cierto que la Asamblea General de Ejidatarios tiene facultades para retirar la calidad de miembro del ejido a quienes se coloquen en los supuestos del artículo 20 de la Ley Agraria, el segundo de los fallos sostiene que dicha facultad debe ejercitarse en aplicación estricta de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Agraria, siendo que el otro convalida una separación de ejidatarios con base en el abandono de los cultivos y del núcleo de población por parte de los sujetos agrarios afectados, situación no contemplada en el precepto antes citado. Pero más aún, los Tribunales Unitarios Agrarios cuyas tesis se estima que entran en contradicción, fundan el tratamiento de una misma materia (separación de ejidatarios), en preceptos diversos: 23, fracción II, en lo tocante al fallo del Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito; y 20 de la Ley Agraria, respecto del fallo del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito.

En síntesis, la contradicción de tesis que se denuncia estriba en definir si las Asambleas de los Núcleos Agrarios tienen la facultad soberana de separar a sus miembros sin limitación alguna o si, por el contrario, dicha facultad está acotada a las causales previstas en el artículo 20 de la Ley Agraria..."



SEGUNDO.- El Presidente de este Tribunal Superior Agrario, mediante proveído de trece de marzo de dos mil dos, admitió a trámite la denuncia respectiva y ordenó a los tribunales de referencia remitir dentro del término de tres días en original o copia certificada, los expedientes en los cuales fueron emitidas las sentencias respecto de las que se denuncian los criterios contradictorios, a fin de estar en aptitud de resolver lo que legalmente corresponda; motivo por el cual, mediante acuerdo de dieciocho del mes y año precitados, el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito 7, con sede en la Ciudad de Durango, Estado del mismo nombre, remitió constancias certificadas del expediente conformado en el juicio natural y que contiene los autos a que hace referencia la denuncia de Contradicción que ahora se resuelve, mientras que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, adujo su imposibilidad material para remitir las actuaciones respectivas, en virtud de encontrarse pendiente de resolución el amparo que una de las partes interpuso en contra de la sentencia de primer grado, motivo por el cual, solo remitió copia certificada de la sentencia a que hace referencia la denuncia de contradicción, y



CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Superior tiene competencia para conocer y resolver la denuncia de Contradicción de Tesis formulada por el Subprocurador General Agrario, en funciones del Titular de la Procuraduría Agraria, con fundamento en los artículos 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9º. fracción V de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- La denuncia de Contradicción de Tesis es promovida por parte legítima, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento Interno de los Tribunales Agrarios, toda vez que los criterios contradictorios son sometidos a la consideración de este Tribunal Superior por el Procurador Agrario, por conducto del Subprocurador General, solicitando se defina: **"...Si las asambleas de los núcleos agrarios tienen la facultad omnímoda de separar a sus miembros sin limitación alguna o si, por el contrario, dicha facultad está acotada a las causales previstas en el artículo 20 de la Ley Agraria..."**.

TERCERO.- El criterio sustentado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que es materia de esta contradicción de criterios, se contiene en la sentencia dictada el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio agrario 232/97; siendo el texto de la sentencia en la parte que interesa el siguiente:

"...Con las pruebas que aportó la parte demandada anteriormente analizadas y valoradas, acredita que mediante Asamblea de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se determinó separar a [REDACTED] y a sus sucesores del ejido en cuestión, manifestando que a tal situación se aplicó el Reglamento Interno del Ejido que entró en vigor el veintiocho de marzo de ese mismo año, de acuerdo con el artículo 23 fracción II de la nueva Ley Agraria vigente, en relación con el artículo 21 inciso c) de dicho Reglamento, el cual reza lo siguiente: PARA TODO EJIDATARIO POR FALTA INJUSTIFICADA, SE LES SANCIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA: C) TERCERA FALTA, SE LE SEPARA DEL EJIDO. Por otra parte el artículo 23 del mismo Reglamento indica: LOS NUEVOS TITULARES POR FALLECIMIENTO Y POR SUCESION SE LES ENTREGARA EL BENEFICIO, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTEN SU TRASLADO DE DOMINIO Y QUE HAYA PROCEDIDO O LO QUE LA ASAMBLEA ACUERDE, sin embargo se

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

puede considerar que en el caso concreto no procedía la separación de [REDACTED] y sus sucesores del ejido en cuestión, toda vez que si bien es cierto que es facultad de la Asamblea de Ejidatarios determinar sobre la aceptación o separación de los mismos, también lo es que las disposiciones que se encuentran incluidas en su Reglamento Interno no pueden sobrepasar las disposiciones de la Ley Agraria, es decir, en el artículo 20 de la misma se nos señalan las causas por las cuales puede perderse la calidad de ejidatario y en ningún momento se señala como causa que el ejidatario no asista a las Asambleas durante tres asambleas consecutivas sin causa justificada, además de que dicha Asamblea nunca fue registrada ante el Registro Agrario Nacional, por tanto, nunca causó efectos contra terceros de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Agraria vigente, tan es así, que dicho Registro expidió la constancia correspondiente a [REDACTED] el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis que obra a fojas 24 del presente juicio, es decir, un año después de que supuestamente ya había sido separado del ejido, por otra parte de autos se desprende según consta a fojas [REDACTED] que el ejido en cuestión recibió una indemnización de [REDACTED] ([REDACTED]), por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de los cuales quedó pendiente de entregar su parte proporcional al sucesor de [REDACTED]

En consecuencia procede declarar nulo el acuerdo de asamblea de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por la que se separó del ejido en cuestión a [REDACTED] y a sus sucesores, así como que le sea entregada la parte proporcional de los cuatro millones que recibió el ejido en cita el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro..."

✓ **CUARTO.-** El criterio sostenido por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, con sede en la Ciudad de Durango, Estado del mismo nombre, que es materia de Contradicción de Tesis se contiene en sentencia dictada el tres de enero de mil novecientos noventa y siete, al resolver el juicio agrario 80/97, cuyo texto, en la parte que interesa dice:

x
9
"...Por otra parte, analizando la prueba base de la acción consistente en la copia certificada del acta de asamblea celebrada el dos de febrero del año en curso, en el ejido [REDACTED], del Municipio de Guanaceví, Estado de Durango, que obra a fojas 17 y 18, se llega a la convicción que hace prueba plena, acorde a lo dispuesto por el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, con la que se demuestra fehacientemente, que de conformidad a las atribuciones que le confiere la fracción II del numeral 23 de la Ley Agraria, por ser de su competencia, la asamblea celebrada en el ejido aludido en la fecha invocada, por mayoría de votos acordó separar del núcleo de población a los ejidatarios [REDACTED]

[REDACTED] y que sus derechos agrarios quedaran a nombre del ejido. Según se advierte de autos, la asamblea para tomar esa determinación, tuvo en consideración la solicitud que por escrito le

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

hicieron en ese sentido dieciocho ejidatarios, documento que obra a foja 48. Tomó en cuenta para ello: Que [REDACTED] y los otros ejidatarios han estado fuera del ejido; no han desempeñado trabajos colectivos y no han asistido a las asambleas celebradas en el núcleo de población desde hace más de cuatro años. Es de remarcarse, que con lo testificado por [REDACTED]

Y [REDACTED] se acredita: Que los ejidatarios separados desde hace aproximadamente ocho años no viven en el mencionado ejido; no han asistido a las asambleas; no participaron en las actividades que se llevaron a cabo en el ejido cuando se formaron los ocho grupos de trabajo en las tierras de uso común; no participaron en ninguna de las actividades que se efectúan en el núcleo de población y que no tienen ganado pastando en las parcelas que les fueron asignadas. Por lo tanto, es incontrovertible que con dichos atestos quedan demostrados los hechos y omisiones que la asamblea considero para separar del ejido a [REDACTED] y a los otros ejidatarios. Las testificaciones en mención y el interrogatorio correspondiente obran de la foja 103 a la 106 y 109, el resultado del referido medio de convicción, hace prueba plena de conformidad con lo establecido por el numeral 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria.

Además, es de explorado derecho que la asamblea como órgano supremo del ejido, tiene facultades para separar a los ejidatarios cuando hayan abandonado por más de cuatro años el cultivo que les correspondía en la explotación colectiva de las tierras del ejido al que pertenezcan y según quedó demostrado, la asamblea tomó en consideración para separar a dichos ejidatarios que habían abandonado el núcleo de población desde hace aproximadamente ocho años, tiempo en el que también abandonaron el cultivo que les correspondía en la explotación colectiva de la tierra ejidal. Por ende, debe tenerse que el acuerdo de asamblea con que se separó del ejido a los referidos ejidatarios no se hizo contraviniendo a la Ley Agraria, sino de conformidad a lo dispuesto en la fracción II de su artículo 23.

El criterio preinserto con antelación, es sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en su tesis bajo el rubro:

“... ASAMBLEAS DE EJIDATARIOS, FACULTADES DE LA. PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA SEPARACIÓN DE LOS EJIDATARIOS DEBE APOYARSE EN PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL ABANDONO DE TIERRAS. Amparo directo 202/94.- José Luis Arias Arellano.- 24 de mayo de 1994.-Unanimidad de votos.- Ponente: Faustino Cervantes León.-

Secretaria: Nora María Ramírez Pérez.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semana (sic) Judicial de la Federación. Epoca 8ª, Vol. Tomo XIV-septiembre 1994, pág. 269. Núm. Tesis o Clave X. 1º 18 A...”.

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

QUINTO.- De las argumentaciones jurídicas vertidas en las sentencias transcritas en la parte que interesa, se advierte que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, al resolver el juicio 232/97 sostiene en síntesis que si bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción II de la Ley Agraria, es competencia de la Asamblea General de Ejidatarios la aceptación y separación de ejidatarios, también lo es, que el artículo 20 del mismo cuerpo legal señala limitativamente tres causales por las que se pierde la calidad de ejidatario.


Por su parte, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, sostiene en síntesis que el artículo 23, fracción II de la Ley de la Materia, otorga a la Asamblea la facultad omnímoda para separar a los ejidatarios y que al haberse acreditado en el juicio natural que los ejidatarios actores abandonaron por más de cuatro años el cultivo de las tierras que les correspondían en la explotación colectiva del ejido al que pertenecen, dicha separación no contraviene la Ley Agraria.

En virtud de lo anterior, se procede a determinar si en el caso existe contradicción de tesis, siguiendo por analogía, el criterio a que se refiere la jurisprudencia 26/2001 del Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintinueve de marzo de dos mil uno y que a continuación se transcribe:


x
8
“**CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.** De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.”

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

En la especie, los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 10 y 7, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México y Durango, Durango, respectivamente, se pronunciaron sobre un mismo tema, que consistió en determinar si resultaba procedente o no, declarar la nulidad de los acuerdos de Asamblea General de Ejidatarios mediante los cuales fueron separados ejidatarios de un núcleo ejidal; advirtiéndose de las sentencias de mérito que los órganos jurisdiccionales agrarios del conocimiento, adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, ya que mientras el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, sostuvo que el artículo 23 fracción II de la Ley Agraria otorga a la asamblea la facultad de separar a los ejidatarios, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 refirió que si bien el artículo 23, fracción II de la Ley de la Materia otorga a la asamblea la facultad de separar a los ejidatarios, dicha facultad se encuentra acotada a los supuestos que señala el artículo 20 de la propia Ley.




Es decir, ambos tribunales al resolver las cuestiones jurídicas expuestas, partieron de bases esencialmente iguales, al considerar el contenido del artículo 23, fracción II de la Ley Agraria, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes, además de que los criterios sostenidos por los Tribunales Unitarios Agrarios en contradicción provienen del examen de los mismos elementos, como lo son la interpretación jurídica del precepto legal invocado en relación a la separación de ejidatarios.



En tales condiciones, este Tribunal Superior Agrario arriba a la convicción de que **sí existe Contradicción** entre los criterios sustentados por los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 10 y 7, de tal manera que es necesario resolver tal discrepancia a fin de lograr uniformidad y seguridad jurídica en cuanto al criterio que ha de prevalecer en lo subsecuente, ya que deben establecerse el verdadero sentido y el alcance de la norma cuya interpretación motivó la denuncia.

La materia de la Contradicción de Tesis consistirá en dilucidar: Si la Asamblea General de Ejidatarios tiene la facultad omnímoda de separar a sus miembros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción II de la Ley Agraria o si, por el contrario, dicha facultad está acotada a las causales previstas en el artículo 20 de la propia ley.



CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

SEXTO.- Determinada la existencia de la Contradicción de Tesis, así como su materia de estudio, resulta necesario llevar a cabo un breve bosquejo histórico tanto de la figura jurídica de pérdida de derechos de ejidatario o comunero, así como de la relativa a la facultad de la Asamblea General de Ejidatarios para separar a sus miembros, desprendidas tanto de la Ley Federal de Reforma Agraria como de la Ley Agraria vigente.

Así las cosas, se tiene que desde la Ley Federal de Reforma Agraria decretada el veintidós de marzo de mil novecientos setenta y uno Ordenamiento legal inmediato anterior al vigente, se establecieron en el artículo 85 diversas causales por las cuales un ejidatario o comunero perdería sus derechos sobre la unidad de dotación y en general los que tuviera como miembro de un núcleo de población ejidal o comunal, siendo éstas las siguientes:

I.- No trabaje la tierra personalmente o con su familia, durante dos años consecutivos o más, o deje de realizar por igual lapso los trabajos que le correspondan, cuando se haya determinado la explotación colectiva, salvo en los casos permitidos por la ley;

II.- Hubiere adquirido los derechos ejidales por su sucesión y no cumpla durante un año con las obligaciones económicas a que quedó comprometido para el sostenimiento de la mujer e hijos menores de 16 años o con incapacidad total permanente que dependían del ejidatario fallecido.

En estos casos, la nueva adjudicación se hará siguiendo el orden de sucesión del anterior titular, autor de la herencia;

III.- Destine los bienes ejidales a fines ilícitos;

IV.- Acapare la posesión o el beneficio de otras unidades de dotación o superficies de uso común, en ejidos y comunidades ya constituidos;

V.- Enajene, realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común o la dé en arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los casos previstos por el artículo 76, y

VI.- Sea condenado por sembrar o permitir que se siembre en su parcela o bienes de uso común, ejidales o comunales, mariguana, amapola o cualquier estupefaciente.

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

Debiendo aclarar que las tres últimas fracciones fueron reformadas y adicionadas de acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, quedando en los términos transcritos.

Es decir, el espíritu del Legislador, mismo que se encuentra plasmado en la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, en tratándose de la pérdida de derechos agrarios, lo fue que las tierras dotadas a los núcleos de población no permanecieran ociosas, motivo por el cual, estatuyó diversas causales para sancionar coercitivamente a los sujetos de derecho agrario que no hicieran productivas las mismas, ya que consideró que era preciso promover la plena explotación agrícola y ganadera y la diversificación de las actividades productivas como un principio de solución al problema económico del ejido y a la necesidad de que el ejidatario y su familia dispusieran de ocupación permanente, pudiendo solucionarse de esta manera la dramática situación resultante de la confluencia del ocio, los niveles de mera subsistencia, el abandono de la tierra, etcétera.

La Ley Federal de Reforma Agraria establecía el procedimiento a seguir en los casos de privación o pérdida de derechos en sus artículos 426 a 433, disponiendo que solamente la Asamblea General o el Delegado Agrario respectivo podrían solicitar el inicio del procedimiento de privación y que en el caso de provenir del primero, deberían reunirse los requisitos establecidos en el artículo 420 del mismo Ordenamiento (suspensión de derechos agrarios previa audiencia de los posibles afectados ante la Asamblea General y la Comisión Agraria Mixta).

Ambos procedimientos, tanto el de suspensión como el de privación de derechos agrarios eran resueltos, previa audiencia de pruebas y alegatos, por la Comisión Agraria Mixta; en el primero de ellos la resolución dictada no era recurrible y en el segundo, permitía el recurso de inconformidad que preveía el artículo 432, ante el Cuerpo Consultivo Agrario.

Como se advierte la Legislación agraria anterior a la vigente, establecía, únicamente, la facultad de la Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros de solicitar a la autoridad administrativa correspondiente, la

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

pérdida o privación de derechos de sus integrantes, petición que debía sustentarse en prueba y previa audiencia en Asamblea General.

Ahora bien, con motivo de la reforma al artículo 27 Constitucional, decretada el tres de enero de mil novecientos noventa y dos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis del mismo mes y año, se instituyeron los Tribunales Agrarios para la administración de justicia agraria en general, dando lugar a la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y a la promulgación de la Ley actual y su Ley Orgánica, publicadas en el mismo órgano de difusión oficial del veintiséis de febrero del mismo año.

En relación al tema que nos ocupa, cabe destacar que en la Exposición de Motivos de la Ley Agraria, particularmente, en el rubro "el ejido y los ejidatarios", expresó:

"...Los núcleos de población ejidal o comunal demandan autonomía y libertad. Por ello la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de transformación institucional que persigue la iniciativa.

En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se concibe como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes.

La Asamblea General, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales. ..."

La motivación anterior da base, entre otros, al artículo 23 de la Ley Agraria vigente, que en la parte relativa dice:

"ARTICULO 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

...II.- Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones..."

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

Por ser materia de la Contradicción de Tesis que se resuelve, es pertinente transcribir el artículo 20 del mismo ordenamiento legal.

ARTICULO 20.- La calidad de ejidatario se pierde:

"I.- Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II.- Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del núcleo de población;

III.- Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta Ley".

De lo antes expuesto, cabe concluir que de acuerdo a la Ley Federal de Reforma Agraria, hoy derogada, la Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros, únicamente estaba facultada a solicitar, previa audiencia de los posibles afectados, la privación o pérdida de los derechos agrarios de sus integrantes, quedando a cargo de la autoridad administrativa agraria la resolución respectiva.; en la Ley vigente, se faculta a la Asamblea General a **decidir de manera exclusiva** sobre las cuestiones que refiere el artículo 23, entre ellas, de la separación de ejidatarios, **otorgando autonomía y libertad al órgano máximo del núcleo agrario para resolver al respecto**, con la única limitante de motivar y fundar sus decisiones con pruebas suficientes que la lleven a dicha conclusión, dando oportunidad de defensa al posible afectado, como lo ha sostenido el Primer tribunal Colegiado del Décimo Circuito al establecer la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XIV, Septiembre-October, 1994, Página 269, cuyo rubro y texto dice:

"ASAMBLEAS DE EJIDATARIOS, FACULTADES DE LA. PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA SEPARACION DE LOS EJIDATARIOS DEBE APOYARSE EN PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL ABANDONO DE TIERRAS.- De conformidad con el artículo 23, fracción II de la Ley Agraria, la Asamblea como órgano del ejido tiene facultades para separar a los ejidatarios cuando hayan abandonado por más de cuatro años el cultivo que les correspondía en la explotación colectiva de las tierras del ejido a que pertenezcan, sin embargo, no basta que por si misma declare la separación puesto que es necesario que existan pruebas suficientes que la lleven a la conclusión de que efectivamente el quejoso haya efectuado tal abandono, para que con base en ello pueda llevar a cabo dicha separación."

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

Al respecto, debe destacarse que en el cuerpo normativo que rige la materia Agraria no existe disposición que establezca las causas de separación de ejidatarios o comuneros, como ocurría en la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, sin embargo, dada la **autonomía y libertad** de los núcleos de población ejidal o comunal en cuanto a su organización y vida interna, la que de conformidad al artículo 10 de la Ley de la Materia operará de acuerdo a su Reglamento Interno, sin mas limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley, ordenamiento interno en el que debe establecerse las causas de separación al igual que las de aceptación, al que todos los integrantes del núcleo agrario están sujetos, ya que dicho Reglamento debe ser sancionado y aprobado por el máximo Organo del núcleo agrario, así como sus modificaciones, tal y como lo dispone la fracción I del artículo 23 de la Ley actual; y en caso de no contar con Reglamento Interno, las causas de separación deben regirse conforme al buen juicio de la Asamblea General, siempre sujetas a la oportunidad de defensa del posible afectado, fundando y motivando su determinación con pruebas suficientes; amén de que dichas determinaciones pueden ser impugnadas ante los Tribunales Agrarios de Primer Instancia.

De una sana interpretación de los artículos 20 y 23, fracción II de la Ley Agraria, se advierte que no necesariamente las causas establecidas en el primero de los artículos mencionados, son limitativas a las facultades de separación de ejidatario o comunero, por la asamblea general.

Se dice lo anterior, toda vez que el artículo 23, fracción II de la Ley Agraria establece entre otras, la facultad de la Asamblea General de Ejidatarios para separar a sus integrantes; es decir, que en dicho acto facultativo, es la asamblea quien actúa, apoyándose para ello en disposiciones de su Reglamento Interno, que tiene el carácter de obligatorio para los miembros que conforman el ente agrario, y en caso de que no exista este ordenamiento interno, al buen juicio de la Asamblea, la que a su vez, es sancionada por la Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros, como órgano máximo del núcleo; acto que como ya se dijo, es susceptible de impugnarse por los afectados ante los tribunales unitarios agrarios para que éstos se pronuncien sobre la legalidad o ilegalidad del mismo.

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

Por su parte, el artículo 20 de la Ley de la Materia estatuye las causales por las que se pierde la calidad de ejidatario, siendo éstas: Por **cesión** legal de sus derechos parcelarios o comunes; por **renuncia** a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población y, por **prescripción negativa**, en su caso, cuando otra persona adquiriera sus derechos en los términos del artículo 48 de la propia ley.

En efecto, el dispositivo legal en comento alude a las causales por las que se pierde la calidad de ejidatario por disposición de la ley, esto es, que la pérdida de derechos que refiere dicho precepto legal **no reside en la comunidad o ejido**, advirtiéndose que dichas causales las lleva a cabo el sujeto de derecho en lo individual (ejidatario o poseedor) sin intervención de la Asamblea General de Ejidatarios y a través de actos personalísimos (cesión, renuncia y prescripción) que también son susceptibles de impugnarse ante los Tribunales Agrarios por los terceros que se sientan afectados por tales actos para que dichos órganos jurisdiccionales revisen y se pronuncien sobre la legalidad o ilegalidad de los mismos.

Es pertinente decir que a pesar de la interpretación diferente entre "pérdida" y "separación" de derechos agrarios, regulados en los artículos 20 y 23 fracción II de la Ley Agraria, respectivamente, éstos no se excluyen entre sí, ya que válidamente pueden invocarse como causa de separación las que contempla el primero de los artículos citados, según sea el caso, puesto que la renuncia implica la voluntad del ejidatario o comunero a separarse del ente agrario, al igual que la cesión de derechos íntegros de ejidatario, y el supuesto de la prescripción negativa, se traduce en el abandono de tierras; causas que pueden ser sometidas a la consideración de la asamblea general tendientes a la separación de ejidatario, con excepción de la última, que debe ser motivo de pronunciamiento jurisdiccional en términos del artículo 48 de la Ley Agraria.

Luego entonces, de las hipótesis jurídicas a que aluden los artículos precitados y que fueran aplicados por los Tribunales Agrarios en contradicción en los términos vertidos en párrafos precedentes, así como de los razonamientos expuestos, se deducen los criterios jurisprudenciales siguientes:

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

PERDIDA DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO Y SEPARACION DE EJIDATARIO POR LA ASAMBLEA GENERAL, SU DIFERENCIA PARA EFECTOS DE INTERPRETACION POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS.- El artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria, establece la facultad exclusiva de la Asamblea General de Ejidatarios para conocer y determinar sobre la separación de sus miembros, disposición que debe ser interpretada de manera armónica con el artículo 10 del mismo ordenamiento legal, que dispone que los ejidos operarán de acuerdo con su reglamento interno, debiendo contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, entre ellos los requisitos para la admisión de nuevos ejidatarios y las demás que el núcleo agrario considere pertinentes. De la interpretación de ambas disposiciones, se pretende desprender que la separación de ejidatarios es una facultad exclusiva de la asamblea general del núcleo agrario, la que deberá apoyarse en las disposiciones que se contengan en su reglamento interno, el cual, tiene el carácter de obligatorio para los miembros que conforman el ente agrario, toda vez que éste debe ser aprobado por la propia asamblea general, sin que contravenga los principios elementales de derecho que estatuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamiento legales que de ella emanen. En contraposición, el artículo 20 de la Ley Agraria, establece las causas por las cuales se pierde la calidad de ejidatario, a saber: Por cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes; por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del núcleo de población, o por prescripción negativa, cuando otra persona adquiriera sus derechos en términos del artículo 48, de la misma ley; es decir que, contrario a lo que ocurre en la separación de ejidatarios, la pérdida de derechos no requiere formalmente intervención de la asamblea general, sino que, estas se refieren a la acción u omisión individual del interesado. Debiendo destacarse que la determinación de la asamblea en cuanto a la separación de uno de sus miembros, es susceptible de impugnación ante los tribunales agrarios, por los terceros que consideran afectados sus derechos, siendo obligación de los órganos jurisdiccionales especializados resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la determinación de la asamblea. Luego entonces, las hipótesis jurídicas de separación y pérdida de derechos agrarios son diferentes y por tanto, las causas de pérdida de derechos de ejidatarios que refiere el artículo 20 de la Ley Agraria no son limitativas de las causas de separación de ejidatarios.

SEPARACION DE DERECHOS AGRARIOS, CAUSAS DE.- De conformidad al artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria, es facultad exclusiva de la asamblea general de ejidatarios o comuneros la separación de los integrantes del ente agrario, precepto legal que en armonía con el artículo 10, del mismo ordenamiento, las causas de aceptación y separación de sus miembros deben estar plasmadas en su reglamento interno y en caso de no existir, éstas deben estimarse por el buen juicio del propio núcleo agrario, sin contravenir disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamientos legales que de ella emanen. Las causas de pérdida de derechos establecidas en el artículo 20 de la ley de la materia, válidamente pueden invocarse como causa de separación, según sea el caso, ya que la renuncia implica la voluntad del ejidatario o comunero a separarse del ente agrario, al igual que la cesión de derechos parcelarios y comunes de ejidatario; y el supuesto de la prescripción

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

negativa, se traduce en el abandono de tierras, causas que pueden ser sometidas a la consideración de la asamblea general, tendiente a la separación de ejidatario, con excepción de la última, que debe ser motivo de pronunciamiento jurisdiccional en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, sin que los motivos de pérdida de derechos establecidos en el artículo 20 del mismo ordenamiento, sean limitativos para la separación de ejidatarios. y

ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS O COMUNEROS. FACULTAD DE LA. PARA DETERMINAR LA SEPARACION DE SUS INTEGRANTES.-

Con motivo de la reforma al artículo 27 Constitucional, decretada el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis del mismo mes y año, se instituyeron los Tribunales Agrarios para la administración de justicia agraria en general, dando lugar a la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y promulgación de la Ley Agraria y su Ley Orgánica, publicadas en el mismo órgano de difusión oficial del veintiséis de febrero del mismo año. En la Exposición de Motivos de la Ley Agraria, particularmente, en el rubro "el ejido y los ejidatarios", se expresa que "...Los núcleos de población ejidal o comunal demandan autonomía y libertad. Por ello la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de transformación institucional que persigue la iniciativa. En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se concibe como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. La Asamblea General, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales. ...". La motivación anterior da base, entre otros, al artículo 23 de la Ley Agraria, que establece la facultad exclusiva de la asamblea para determinar la separación de los integrantes del núcleo agrario. De lo antes expuesto, se concluye que en la ley vigente, se faculta a la asamblea general a decidir de manera exclusiva sobre las cuestiones que refiere dicho precepto legal, entre ellas, de la separación de ejidatarios, otorgando autonomía y libertad al órgano supremo del ejido para resolver al respecto, con la única limitante, de motivar sus decisiones con pruebas suficientes que sustenten su determinación, dando oportunidad de defensa al posible afectado, como así lo ha sostenido el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al establecer la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XIV, Septiembre-Octubre, 1994, Página 269, cuyo rubro dice: **"ASAMBLEAS DE EJIDATARIOS, FACULTADES DE LA. PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA SEPARACION DE LOS EJIDATARIOS DEBE APOYARSE EN PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL ABANDONO DE TIERRAS."**; debe destacarse que en el cuerpo normativo que rige la materia Agraria, no existe disposición que establezca las causas de separación de ejidatarios o comuneros, como ocurría en la derogada Ley Federal de Reforma Agraria; sin embargo, dada la autonomía de los núcleos de población ejidal o comunal en cuanto a su organización y vida interna, la que de conformidad al artículo 10 de la Ley Agraria operarán de acuerdo a su reglamento interno, sin mas limitaciones en sus actividades que las que

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

90

dispone la ley, ordenamiento interno en el que deben establecerse las causas de separación al igual que las de aceptación, al que todos los integrantes del núcleo agrario están sujetos, ya que dicho Reglamento debe ser sancionado y aprobado por el máximo órgano del núcleo agrario, así como sus modificaciones, tal y como lo dispone la fracción I del artículo 23 de dicha ley; y en el supuesto de no contar con reglamento interno, las causas de separación deben estimarse por el propio núcleo, sin contravenir las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamientos legales que de ella emanen, cuya determinación deberá sujetarse a la oportunidad de defensa del posible afectado, y prueba suficiente que la sustente.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 9º, fracción V de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es de resolverse y se

RESUELVE:

PRIMERO.- Si existe Contradicción de Tesis entre las sustentadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México y por su similar del Distrito 7, con sede en la Ciudad de Durango, Estado de Durango, al resolver los juicios agrarios 232/97 y 80/97, respectivamente.

SEGUNDO.- De conformidad a los razonamientos expuestos en el apartado de considerandos del presente fallo, se establece con carácter de jurisprudencia los criterios que sustenta este Tribunal Superior y que son del tenor siguiente:

“PERDIDA DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO Y SEPARACION DE EJIDATARIO POR LA ASAMBLEA GENERAL, SU DIFERENCIA PARA EFECTOS DE INTERPRETACION POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS. El artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria, establece la facultad exclusiva de la Asamblea General de Ejidatarios para conocer y determinar sobre la separación de sus miembros, disposición que debe ser interpretada de manera armónica con el artículo 10 del mismo ordenamiento legal, que dispone que los ejidos operarán de acuerdo con su reglamento interno, debiendo contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, entre ellos los requisitos para la admisión de nuevos ejidatarios y las demás que el núcleo agrario considere pertinentes. De la interpretación de ambas disposiciones, se pretende desprender que la separación de ejidatarios es una facultad exclusiva de la asamblea general del núcleo agrario, la que deberá apoyarse en las disposiciones que se contengan en su reglamento interno, el cual, tiene el carácter de obligatorio para los

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

miembros que conforman el ente agrario, toda vez que éste debe ser aprobado por la propia asamblea general, sin que contravenga los principios elementales de derecho que estatuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamiento legales que de ella emanen. En contraposición, el artículo 20 de la Ley Agraria, establece las causas por las cuales se pierde la calidad de ejidatario, a saber: Por cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes; por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del núcleo de población, o por prescripción negativa, cuando otra persona adquiera sus derechos en términos del artículo 48, de la misma ley; es decir que, contrario a lo que ocurre en la separación de ejidatarios, la pérdida de derechos no requiere formalmente intervención de la asamblea general, sino que, estas se refieren a la acción u omisión individual del interesado. Debiendo destacarse que la determinación de la asamblea en cuanto a la separación de uno de sus miembros, es susceptible de impugnación ante los tribunales agrarios, por los terceros que consideran afectados sus derechos, siendo obligación de los órganos jurisdiccionales especializados resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la determinación de la asamblea. Luego entonces, las hipótesis jurídicas de separación y pérdida de derechos agrarios son diferentes y por tanto, las causas de pérdida de derechos de ejidatarios que refiere el artículo 20 de la Ley Agraria no son limitativas de las causas de separación de ejidatarios.

SEPARACION DE DERECHOS AGRARIOS, CAUSAS DE.- De conformidad al artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria, es facultad exclusiva de la asamblea general de ejidatarios o comuneros la separación de los integrantes del ente agrario, precepto legal que en armonía con el artículo 10, del mismo ordenamiento, las causas de aceptación y separación de sus miembros deben estar plasmadas en su reglamento interno y en caso de no existir, éstas deben estimarse por el buen juicio del propio núcleo agrario, sin contravenir disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamientos legales que de ella emanen. Las causas de pérdida de derechos establecidas en el artículo 20 de la ley de la materia, válidamente pueden invocarse como causa de separación, según sea el caso, ya que la renuncia implica la voluntad del ejidatario o comunero a separarse del ente agrario, al igual que la cesión de derechos parcelarios y comunes de ejidatario; y el supuesto de la prescripción negativa, se traduce en el abandono de tierras, causas que pueden ser sometidas a la consideración de la asamblea general, tendiente a la separación de ejidatario, con excepción de la última, que debe ser motivo de pronunciamiento jurisdiccional en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, sin que los motivos de pérdida de derechos establecidos en el artículo 20 del mismo ordenamiento, sean limitativos para la separación de ejidatarios. y

ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS O COMUNEROS. FACULTAD DE LA PARA DETERMINAR LA SEPARACION DE SUS INTEGRANTES.-

Con motivo de la reforma al artículo 27 Constitucional, decretada el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis del mismo mes y año, se instituyeron los Tribunales Agrarios para la administración de justicia agraria en general, dando lugar a la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y promulgación de la Ley Agraria y su Ley Orgánica, publicadas en el mismo órgano de difusión

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

oficial del veintiséis de febrero del mismo año. En la Exposición de Motivos de la Ley Agraria, particularmente, en el rubro "el ejido y los ejidatarios", se expresa que **"...Los núcleos de población ejidal o comunal demandan autonomía y libertad. Por ello la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de transformación institucional que persigue la iniciativa. En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se concibe como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. La Asamblea General, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales. ..."**. La motivación anterior da base, entre otros, al artículo 23 de la Ley Agraria, que establece la facultad exclusiva de la asamblea para determinar la separación de los integrantes del núcleo agrario. De lo antes expuesto, se concluye que en la ley vigente, se faculta a la asamblea general a decidir de manera exclusiva sobre las cuestiones que refiere dicho precepto legal, entre ellas, de la separación de ejidatarios, otorgando autonomía y libertad al órgano supremo del ejido para resolver al respecto, con la única limitante, de motivar sus decisiones con pruebas suficientes que sustenten su determinación, dando oportunidad de defensa al posible afectado, como así lo ha sostenido el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al establecer la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XIV, Septiembre-Octubre, 1994, Página 269, cuyo rubro dice: **"ASAMBLEAS DE EJIDATARIOS, FACULTADES DE LA. PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA SEPARACION DE LOS EJIDATARIOS DEBE APOYARSE EN PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL ABANDONO DE TIERRAS."**; debe destacarse que en el cuerpo normativo que rige la materia Agraria, no existe disposición que establezca las causas de separación de ejidatarios o comuneros, como ocurría en la derogada Ley Federal de Reforma Agraria; sin embargo, dada la autonomía de los núcleos de población ejidal o comunal en cuanto a su organización y vida interna, la que de conformidad al artículo 10 de la Ley Agraria operarán de acuerdo a su reglamento interno, sin mas limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley, ordenamiento interno en el que deben establecerse las causas de separación al igual que las de aceptación, al que todos los integrantes del núcleo agrario están sujetos, ya que dicho Reglamento debe ser sancionado y aprobado por el máximo órgano del núcleo agrario, así como sus modificaciones, tal y como lo dispone la fracción I del artículo 23 de dicha ley; y en el supuesto de no contar con reglamento interno, las causas de separación deben estimarse por el propio núcleo, sin contravenir las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes u ordenamientos legales que de ella emanen, cuya determinación deberá sujetarse a la oportunidad de defensa del posible afectado, y prueba suficiente que la sustente.

CONTRADICCION DE TESIS No. 1/2002

TERCERO- Publíquense los puntos resolutivos del presente fallo en el Boletín Judicial Agrario.

CUARTO.- Con testimonio del presente fallo, hágase del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios en contradicción y con copia certificada a los demás Tribunales Agrarios del país; y devuélvanse los autos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7 con sede en la Ciudad de Durango, Estado de Durango.

QUINTO.- Con testimonio de esta resolución, hágase del conocimiento de la Procuraduría Agraria y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de cuatro votos y uno en contra del Magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ

MAGISTRADOS

LIC. LUIS OCTAVIO PORTE PETIT MORENO

LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS

LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ GUERRERO


LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LIC. HUMBERTO JESUS QUINTANA MIRANDA



TRIBUNALES AGRARIOS

 TRIBUNALES AGRARIOS	Concepto	Dónde:
	Fecha de clasificación	20/06/2024 Sesión vigésima primera extraordinaria del Comité de Transparencia
	Área	Tribunal Superior Agrario, Secretaría General de Acuerdos
	Información confidencial	Nombre De Poblado: 1,2,3,6 Nombre de Personas Físicas: 1,2,3,5,6,7 Indemnización: 6
	Fundamento legal	Se eliminó nombres de personas físicas, indemnización, de conformidad con artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numeral sexagésimo de los lineamientos generales de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Se eliminó nombre de poblado o núcleo agrario, de conformidad con el artículo 113 fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numeral sexagésimo de los lineamientos generales de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
	Rubrica del titular de área	

EXPEDIENTE NUMERO: 080/97

vs.

ASAMBLEA DEL EJIDO " *****"

GUANACEVI, DURANGO Y

REGISTRO AGRARIO

NACIONAL

NULIDAD DE ACTOS QUE CONTRAVIENEN

LAS LEYES AGRARIAS.

Durango, Durango, a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

VISTO para resolver en definitiva los autos del expediente 080/97, relativo a la acción de nulidad de actos que contravienen las leyes agrarias, promovida por los CC. *****,
*****, ***** Y *****, en contra de la asamblea ejidal del núcleo de población denominado " *****" ubicado en el Municipio de Guanaceví, Estado de Durango, en la que los actores reclama al Supremo Ejidal aludido, las siguientes prestaciones :

La nulidad del acuerdo de asamblea de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y siete, por medio del cual según afirman los actores, arbitrariamente se determinó separarlos o darlos de baja como ejidatarios del núcleo de población denominado " ***" ubicado en el Municipio de Guanaceví, Estado de Durango.**

b) Consecuentemente, la declaración de este Tribunal Unitario Agrario, en el sentido de que deben continuar vigentes los derechos agrarios de todos y cada uno de los demandantes como ejidatarios del referido núcleo de población ; y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. - El día once de marzo de mil novecientos noventa y siete, los CC. *****, *****, ***** Y *****, presentaron ante este

Tribunal, un escrito mediante el cual comparecieron demandando a la asamblea ejidal del núcleo de población denominado " *****" del Municipio de Guanaceví , Estado de Durango, por la acción de nulidad de actos que contravienen a la Ley Agraria , en la que les reclama las prestaciones ya transcritas con antelación.

SEGUNDO. - Por auto dictado el once de marzo del presente año, este Tribunal Unitario Agrario, tuvo por presentado el referido escrito. Una vez que se admitió la demanda se inscribió en el Libro de Gobierno bajo el número correspondiente y se ordenó emplazar a la referida asamblea demandada por conducto de su órgano de representación ejidal a fin de que comparecieran a la audiencia de ley, para cuya celebración se señaló hora y fecha.

TERCERO.- Durante la audiencia de derecho, comparecieron los actores ***** , ***** , acompañados de su asesor jurídico. Por parte del órgano supremo ejidal demandado, solo se presentó el C. ***** , presidente del Comisariado Ejidal No comparecieron el Secretario y Tesorero de dicho órgano representativo, a pesar de que fueron emplazados y notificados de la hora y fecha en que se verificaría dicha audiencia, lo cual se demuestra con las constancias procesales que obran a fojas 23 y 24. En virtud que la parte demandada, compareció a la diligencia sin asesor legal, este Tribunal ordenó diferir la audiencia y girar oficio a la Procuraduría Agraria en el Estado, para que les asignara un defensor, quedando desde ese momento a la vista del profesionista que se nombrara, los autos de esta causa agraria, para que se enterara del contenido de ellos. Además, se señaló hora y fecha para la reanudación de la audiencia de Ley.

CUARTO. - En la hora y fecha prefijada, se reinició la audiencia a la que comparecieron ambas partes acompañadas por sus respectivos asesores jurídicos. El órgano supremo del núcleo de población en mención parte demandada, por conducto del comisariado ejidal dio contestación por escrito a la demanda y reconvino a los demandantes. Este Tribunal previno a los integrantes de dicho comisariado para que dentro de un término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación, precisaran las prestaciones concretas que reclaman a su contraparte en su escrito reconvencional, apercibiéndolos que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del tiempo que se les concedió, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 325 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, se les tendría por no interpuesta la reconvención. Por acuerdo fechado el quince de agosto del presente año, este Tribunal tuvo a la parte demandada en la acción principal, dando cumplimiento a la prevención en mención y reconviniendo a su contraparte; así mismo, se ordenó que con las copias de la reconvención y aclaración de la misma se corriera traslado a la parte reconvenida, requiriéndole para que dieran contestación a más tardar en la audiencia de ley, para cuya celebración se fijó hora y fecha.

QUINTO.— En la fecha señalada se dio inicio a la audiencia de derecho, comparecieron las contrapartes acompañadas por sus respectivos asesores jurídicos, este Tribunal tuvo a la actora de la acción principal dando contestación por escrito a la reconvención interpuesta en su contra.

En este juicio agrario los actores *****, *****, ***** Y *****, con el fin de demostrar los hechos constitutivos de su acción principal, ofrecieron y les fueron admitidos los siguientes medios probatorios: Confesional a cargo de los integrantes del órgano de representación de la asamblea demandada; testimonial, a cargo de los CC. *****, copia certificada de los certificados parcelarios números *****, *****,

*****Y *****, expedidos respectivamente en favor de los actores de la acción principal, el seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por el C. Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional; copias certificadas de los certificados de derechos sobre tierras de uso común números *****, *****, y *****, extendidos en la misma fecha por el funcionario en mención, en favor de los CC. *****, ***** y *****; copia fotostática certificada de las actas de asambleas celebradas en el núcleo de población invocado, en los días veintiséis de junio de mil novecientos noventa y tres, dos de febrero del presente año; instrumental de actuaciones; presuncional legal y humana. Las documentales reseñadas con antelación obran en autos (desde la foja 7 a la 18.

La asamblea demandada; por conducto de su órgano de representación, con el fin de demostrar los hechos constitutivos de defensas y excepciones en la acción principal, así como los de la acción reconvencional, ofreció y le fueron admitidos los siguientes medios de convicción: Confesional a cargo de los CC. *****; testimonial, a cargo de *****; primera convocatoria y acta de asamblea celebrada en el ejido " *****" ubicado en el municipio de Guanaceví, Estado de Durango; escrito fechado el dos de febrero del presente año, signado según lo afirma la parte oferente, por veintidós ejidatarios del núcleo de población en mención; constancia, de fecha siete de julio del año en curso, expedida por el C. Presidente Municipal de Guanaceví, Estado de Durango; quince fotografías tomadas a las parcelas que según afirma la parte oferente, pertenecieron respectivamente a su contraparte; contrato de compraventa fechado el veinte de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, relativo a un inmueble urbano, en el que se encuentra edificada una casa habitación, ubicado en el ejido referido, celebrado por el vendedor *****, por una parte y por la otra, como comprador *****, el acto jurídico contó con el consentimiento de la esposa del vendedor. Dicho documento, también se encuentra firmado y sellado por el C. Juez Municipal de Guanaceví, así como por un integrante del comisariado del ejido y otro del consejo de Vigilancia de dicho núcleo de población; acta fechada el dieciocho de julio del presente año, levantada por el C. Juez Municipal de Guanaceví, Estado de Durango, relativa a una información testimonial referente a hechos de los actores de

la acción principal; primera convocatoria, acta de no verificativo, segunda convocatoria y acta de asamblea, celebrada en el ejido citado el quince de noviembre del año próximo pasado; primera "convocatoria, segunda convocatoria, acta de no verificativo y acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, celebrada en el núcleo de poblapión invocado, el tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco; inspección Judicial, este Tribunal o le admitió a la parte oferente dicho medio de convicción, en virtud que no precisó los puntos sobre los cuales versaría la mencionada prueba; oficios número SAGDR-SG/775/97 y SAGDR-SG/776/97, fechados el seis de agosto del presente año, signados y sellados por el C. Director de Control y Movilización de Ganado, de la Subsecretaría de Ganadería, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dirigidos al C. *****; constancia de fecha once de agosto del presente año, signada y sellada por el C. Presidente Seccional Municipal de Pueblito de Allende, Estado de Chihuahua; copia fotostática de la denuncia de fecha cuatro de agosto del año en curso, presentada por el ofendido *****, ante el C. Agente Investigador del Ministerio Público del fuero común, encargado de la mesa número dos, correspondiente al municipio de Durango, en esta Entidad Federativa, interpuesta en contra del inculpado *****certificado lesiones fechado cuatro de agosto del presente año, expedido por los Médicos Legistas adscritos a la Dirección de Servicios periciales de la Procuraduría General del Estado de Durango, relativo a las lesiones que presentó en su integridad física *****; instrumental de actuaciones; presuncional Legal y Humana. Las documentales referidas con antelación, obran en autos de la foja 44 a la 82, 87 a 91. Además, la parte reconvenida ofreció como prueba, el libro de actas del ejido aludido, mismo que se tiene a la vista al dictar esta resolución. Una vez que se desahogaron los medios probatorios que se admitieron a las contrapartes y que alegaron lo que a su derecho respondió, se ordenó turnar los presentes autos para el dictado de la sentencia, que en derecho proceda, la que hoy se emite al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO . - Este Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito, con sede en la Ciudad de Durango, Durango, es competente para conocer y resolver los autos que integran el presente juicio agrario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 , 164, 167, 170, 178, 185, 186, 187, y demás relativos de la Ley Agraria, 18, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; así mismo, por el acuerdo del Tribunal Superior Agrario, dictado el día trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis , mediante el cual modifica la competencia territorial de este Órgano Jurisdiccional y de los Tribunales Unitarios Agrarios Distritos Seis y Veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre del mismo año.

SEGUNDO.- Antes de entrar al estudio de la acción principal, de nulidad de actos que contravienen las Leyes Agrarias, promovida por los demandantes ***** , en contra de la asamblea ejidal del núcleo de población denominado " *****" ubicado en el Municipio de Guanaceví, Estado de Durango, el suscrito jurisdicente considera pertinente asentar lo siguiente :

Que los actores ***** , en su escrito inicial de demanda, hicieron consistir los hechos de su acción principal en los siguientes:

Somos miembros del ejido " *****" municipio de Cuanaceví, Durango, derechos que nos fueran reconocidos mediante la resolución presidencial que dotó de tierras al poblado en mención. Por determinación de la Asamblea del Ejido, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa, y tres, se acordó llevar a cabo la explotación de las tierras de uso común, creación de grupo de trabajo; ya que por la naturaleza del suelo y el tipo de clima los terrenos del ejido son aptos para la ganadería en su mayor parte. Se crearon ocho grupos de trabajo, quedando ***** en el primer grupo, ***** en el número dos y en el número cuatro ***** y ***** , entre otros. A partir de la fecha señalada, los ahora demandantes hemos participado ininterrumpidamente en la explotación de las áreas de agostadero que nos fueron asignadas, ya que nuestro ganado constantemente se encuentra en los potreros que nos corresponden y

en temporadas de siembra, los que tenemos nuestra parcela la hemos estado cultivando. Debido a que el clima solo permite el cultivo de temporal. En algunas ocasiones, salimos del ejido en busca de otro tipo de trabajos, pero invariablemente, Continuamos aprovechando las tierras ejidales de una forma completamente normal. En asamblea general de ejidatarios celebrada el pasado dos de febrero del año en curso la mayoría determinó separarnos como miembros del ejido al que pertenecemos, bajo el argumento de que:

"... Mediante resolución presidencial fueron reconocidos 34 ejidatarios del ejido " *****" Municipio de Guanaceví, Durango, de entre ellos *****, *****, ***** y *****; cabe mencionar que éste ————— último, en el ejido es conocido como *****, incluso en todos los actos y hechos que realizaba se presentaba como *****, además sus hijos utilizaban el apellido de *****y no el de. Pero éstas personas hoy parte actora en el juicio agrario, salieron del ejido desde el año de mil novecientos ochenta y nueve dando como consecuencia la renuncia tácita a sus derechos agrarios pues con el transcurso del tiempo el abandono de un derecho surte efectos prescriptivos de acuerdo al artículo 1142 del Código Civil para el Distrito Federal. Por acÚerdo de asamblea el día 26 de 1993, se acordó formar grupos de trabajo para la explotación de las tierras de uso común del ejido y estos fueron formados de acuerdo al número de ejidatarios que aparecían en la resolución presidencial, no de los asistentes de esta asamblea. Como claramente se observa en el punto número uno del orden del día, a ésta asamblea asistieron 28 de los 34 ejidatarios del ejido de entre estos ausentes se los señores *****, *****,

***** (*****) y ***** , pues salieron del ejido desde el año de 1989 y hasta la fecha no han regresado. Los grupos se formaron, de acuerdo al número de ejidatarios del ejido y en ningún momento se tomó como base el número de los 28 asistentes a la asamblea y esto claramente se observa en la relación de ejidatarios que se formaron los grupos de trabajo, cuando a también es muy notoria su ausencia al no firmar la

"...Todos ellos han estado fuera del ejido, no han desempeñado trabajos colectivos y existen evidencias de . que han enajenado en forma irregular los derechos que como ejidatarios les pertenecen y además la inasistencia a asambleas . . . " La mencionada determinación de la asamblea fue tomada de manera arbitraria, sin derecho, sin darnos la más mínima oportunidad de defensa ya que los hechos que nos imputan son falsos y además no significan de manera alguna que hayamos abandonado la explotación de las tierras ejidales; cabe advertir además, que en el ejido jamás se llevan a cabo los trabajos colectivos sino únicamente dentro de cada uno de los grupos de trabajo se realiza la reparación de cercos, canoas, abrevaderos, etc. pero por si esto fuera poco NO EXISTE HASTA LA ACTUALIDAD ALGUN REGLAMENTO INTERNO QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DEL POBLADO y que prevea las sanciones que deban aplicarse, de manera que siempre nos hemos sujetado a las reglas que impone la costumbre, por que al determinar de manera imprevista nuestra separación como ejidatarios, la asamblea general . de ejidatarios ha emitido un acuerdo que resulta violatorio de nuestros derechos, motivo por el cual acudimos ante este H. Tribunal, solicitado la aplicación de justicia que nos asiste en el presente caso. . . "

La asamblea demandada, en su escrito de contestación de demanda, por conducto de su órgano de representación, hizo consistir los hechos

constitutivos de sus defensas y excepciones de la acción principal en los siguientes:

de asistencia de la asamblea celebrada el día 26 de junio de 1993. Desde el año de 1989 que abandonaron el ejido y por ende también sus parcelas que se les adjudicaron para que las trabajaran, no para que las abandonaran, esto claramente se observa en las fotografías que anexamos al presente y que servirán de prueba, además no atienden ganado pues este ni siquiera lo tienen, tan es así que el fierro de herrar de ***** (*****) , fue cancelado desde el 26 de febrero de 1992; y en el año de 1984, fue cancelado el de *****; en el caso de ***** y ***** , no se encuentra registrado fierro de herrar a su nombre; pues estas personas nunca han tenido ganado. El acuerdo que se tomó con fecha 2 de febrero de 1997, en ningún momento fue un acuerdo tomado por la asamblea y conforme el artículo 22 de la Ley Agraria, la asamblea, es el órgano supremo del ejido.

Además la ley agraria en el artículo 23 fracción II es claro al mencionare-óte es fácul tad de la asamblea aceptar y separar ejidatarios y esto se hace por el incumplimiento a las obligaciones Como ejidatarios, pues .si bien es cierto que como ejidatarios legalmente reconocidos tenemos derechos , también tenemos obligaciones y cuando incumplimos con nues tras obligaciones, por supuesto que no podemos ejercitar ese derecho además las tierras ejidales que se les adjudican a los ejidatarios son para trabajarlas y no para abandonarlas . . . " .

TERCERO.- Una vez transcrito lo anterior, es menester asentar que la acción principal de nulidad de actos que contravienen las Leyes Agrarias, promovida por ***** , en contra de la asamblea del núcleo de población ejidal denominado " *****" ubicado en el Municipio de Guanaceví , Estado de Durango, se encuentra prevista en la fracción VIII, del artículo 18, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios .

La litis en la acción antes referida, se constriñe en determinar y resolver por este Tribunal, si son procedentes las pretensiones de los actores en la acción principal ***** , consistente en la nulidad del acuerdo de la asamblea celebrada en el ejido " ***** " del Municipio de Guanaceví, Estado de Durango, el dos de febrero del presente año, en el que determinó separarlos o darlos de baja como ejidatarios; además, se circunscribe en si este Tribunal, debe declarar que los actores de dicha acción; deben continuar con sus derechos agrarios vigentes como ejidatarios del referido núcleo de población.

CUARTO: - Fijada la litis en los términos preinsertos en el considerando que antecede, previo un análisis de las constancias procesales que obran en los presentes autos, esencialmente de la referida acta de asamblea, que es el documento base de la acción, el suscrito jurisdicente llega a a convicción plena y fundada de que, son improcedentes los reclamos hechos por los demandantes ***** , acción principal de nulidad de actos que contravienen las leyes agrarias, ello es así, acorde a los razonamientos fundados y motivados que se verterán a continuación:

Los demandantes ***** , ofrecieron en copia certificada los siguientes documentos: certificados parcelarios números ***** , ***** , *****y ***** , así como de derechos sobre tierras de uso común, números ***** , *****y ***** , expedidos respectivamente en favor de los antes mencionados seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por el C. Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional ; adminiculados, al acta de asamblea celebrada en el ejido citado, el día veintiséis de junio de mil novecientos noventa y tres. Dichos medios de convicción, obran de la foja 7 a la 16 y hacen prueba plena de confortnidad a lo establecido por los artículos 150 de la Ley Agraria, 130, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley antes invocada, con los que los accionantes demuestran los siguientes hechos:

Que el seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el C. Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, expidió respectivamente en favor los hoy demandantes en la acción principal ***** , los certificados y de derechos sobre tierras de uso común referidos con antelación, relativos al núcleo de población denominado " ***** " del Municipio de Guanaceví, Estado de Durango. También, se acredita que la asamblea celebrada el -veintiséis de junio de mil novecientos noventa y tres, en el núcleo de población aludido, por unanimidad de votos acordó que la tierra de uso común del ejido, se explotaría por grupos formados por ejidatarios, integrándose así ocho agrupaciones , quedando solamente ***** , para trabajar la tierra de uso común en forma individual . ***** , quedó considerado en el grupo 1; ***** , en el grupo 2; ***** y ***** , en el número 4.

Dichos hechos no son controvertidos, no obstante aún demostrados son irrelevantes jurídicamente para demostrar los hechos constitutivos de la acción intentada por la parte demandante, pues no se acredita con ellos que el acuerdo aludido de la asamblea referida contravenga a la Ley Agraria .

Además, del estudio hecho al resultado de la prueba testimonial a cargo de ***** , el suscrito jurisdicente con el arbitrio que le concede el único párrafo del artículo 215 del Código invocado, para apreciar y valorar la prueba testimonial, considera que se debe tener que lo vertido por los mencionados testificantes, es intrascendente y carece de eficacia jurídica para acreditar la acción principal. En efecto, ambos coinciden en afirmar que saben y les consta:

" . . que ***** , se encuentran actualmente usufructuando las tierras de agps ader que les corresponden dentro de sus respectivos grupos de trabajo. Cabe remarcar, que el' órgano supremo estatal para separar a , los antes mencionados, consideró que han estado /fuera del ejido; que no han desempeñado -trabajos colectivos y ,que no han asistido a las asambleas desde hace más de cuatro años . Luego entonces, si es hasta en la actualidad cuando tienen en usufructo las tierras referidas, tales actos no desvirtúan los motivos que llevaron al órgano supremo

ejidal a tomar la determinación de separar del ejido a dichos ejidatarios, máxime que ello es competencia de la asamblea, acorde a la facultad que le confiere la fracción II, del artículo 23 de la Ley Agraria. Las testificaciones en mención y el interrogatorio correspondiente, obran a fojas 102 y 125.

En relación a la prueba confesional, según se advierte de autos, este Tribunal tuvo por confesos a los integrantes del órgano que representa a la asamblea demandada, de las posiciones que se calificaron de legales, ello de conformidad a lo establecido por el artículo 124 fracción I, del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en virtud que se tuvo a dicho comisariado por no presente en la audiencia de derecho, sin que haya demostrado causa justa de su Incomparecencia. Es verdad, que conforme a lo dispuesto por la fracción III del numeral 199, del Código invocado, los eventos confesados por los antes mencionados son hechos propios de la parte demandada que representan; sin embargo, con el contenido de las posiciones confesadas fictamente que tienen relación con la litis, concretamente las números 3, 5, y 7, que se aprecian en el pliego que consta a fojas 123 y 124, se demuestra que los absolventes confesaron los siguientes hechos :

'. . .que antes de decidir la separación e los actores como miembros del ejido, la asamblea no recabó ningún tipo de pruebas para justificar su determinación; que el señor ***** tiene su casa, tierras de siembra y corrales de manejo de ganado en el rancho " *****" dentro del ejido " LOS *****"; que los demandantes, han estado viviendo en algunas temporadas fuera del ejido (y que jamás —hán abandonado la explotación ganadera dentro de los potreros que les fueron asignados . . . " .

No obstante, dicha confesión carece de eficacia jurídica y no hace fe plena en contra de la parte que representan los eo-nfêSantes, en virtud que es de explorado derecho, que para que la confesión ficta pueda revestir valor probatorio pleno, no se debe encontrar contradicha con otros medios de convicción, o estándolo, se adminicule con otros elementos

probatorios, que al ser examinados conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia, en su conjunto produzcan mayor convicción que los discrepantes y en la especie, con lo testificado por los CC . ***** , se desvirtúan los hechos propios confesados por los integrantes del mencionado órgano de representación ejidal . En efecto dichos testigos expresaron que saben y les consta:

" . . . Que ***** , desde hace aproximadamente o años no viven en el ejido " ***** " del Municipio de Guanaceví, estado de Durango; que no han asistido a las asambleas que se celebran en el mencionado núcleo de población; que no se presentaron a la asamblea que se celebró en el citado ejido el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y tres; que no participaron en las actividades que se llevaron a cabo en el ejido cuando se formaron los ocho grupos de trabajo; que desde hace aproximadamente ocho años, no participan en ninguna de las actividades que se realizan en el mencionado núcleo de población y que no tienen ganado pastando en las parcelas que se les asignó. . . " .

Dichos atestos y el interrogatorio correspondiente obran de la foja 103 a la 106 y 109. Aunado al contenido del Libro de actas del ejido que se tiene a la vista, con e se demuestra que a la última asamblea a la que asistieron los actores de la acción principal, fue a la celebrada el seis de julio de mil novecientos noventa. El resultado de los mencionados medios de convicción, hacen prueba plena de conformidad a lo establecido por los numerales 203 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Léy Agraria, con los que se demuestra plenamente que contrariamente a lo aseverado en la confesión ficta, los mencionados actores en la acción principal, no viven en el ejido desde hace aproximadamente ocho años; no han asistido a las asambleas; no participan en ninguna de las actividades que se efectúan en el núcleo de población y ninguno de ellos tiene ganado pastando en las parcelas que le fueron asignadas. Luego entonces, se debe tener que la confesión ficta en mención, carece de eficacia jurídica al desvirtuarse con el resultado de las testificaciones invocadas. Cabe asentar que lo confesado por los referidos integrantes del comisariado ejidal , no se adminicula con otros

elementos probatorios que apoyen la confesión ficta. Incluso, la asamblea si justifica su determinación de separar a los ejidatarios referidos, pues según se demuestra en autos, lo hizo con motivo del escrito que obra a ja 48, fechado el dos de febrero del año en curso, signado por dieciocho ejidatarios, en el que le solicitan al órgano supremo ejidal , la separación de los citados ejidatarios, cuyo reclamo fue atendido por la asamblea . Máxime, que los asambleístas por ser ejidatarios del mismo núcleo de población, son sabedores del tiempo que se ausentaron del ejido las citadas personas que fueron separadas; así mismo, se considera que son conocedores de los otros hechos y omisiones que la asamblea tomó en cuenta para determinar su separación . .

Sirve también para fundar jurídicamente lo razonado y motivado anterioridad, el criterio sostenido por el Quinto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, en su tesis bajo el rubro:”... CONFESIÓN FICTA VALOR PROBATORIO DE LA. Amparo directo 1480/90. Irene Huitrón López. 16 de agosto de 19920. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. Amparo Directo 2860/90. María Dolores Díaz García. 6 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa . Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán. Amparo directo 743/91. Petra Santiago. 14 de marzo de 1991. unanimidad de votos . Ponente: José Luis Caballero Cárdenas. Secretario: Alejandro Javier Pizaña Nila.

Amparo directo 317 / 91. Giovanni Guido Bussani y otra. 22 de marzo de 1991- Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa . Secretario : Walter Arellano Hobelsberger .

Amparo directo 1355/91. Fernando Vogel Soloveichik. 18 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa . Secretaria : Guadalupe Gama Casas .

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Época 8⁰ . vol . Tomo VII - mayo. pág 81. Núm. Tesis o Clave 1.50. C J/ 15. " .

Por otra parte, analizando la prueba base de la acción, consistente en la copia certificada del acta de asamblea celebrada el dos de febrero del año en curso, en el ejido " *****" del Municipio de Guanaceví, Estado de Durango, que obra a fojas 17 y 18, se llega a la convicción que hace prueba plena, acorde a lo dispuesto por el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, con la que se demuestra fehacientemente, que de conformidad a las atribuciones que le confiere la fracción del numeral 23 de la Ley Agraria, por ser de su competencia, la asamblea celebrada en ejido aludido en la fecha invocada por mayoría de votos acordó separar del núcleo de población los ejidatarios ***** , ***** , ***** y ***** y que sus derechos agrarios quedaran a nombre del ejido. Según se asamblea para tomar esa determinación, tuvo en consideración la solicitud que por escrito le hicieron en ese sentido dieciocho ejidatarios, documento que obra a foja 48. Tomó en cuenta para ello: Que ***** y los otros ejidatarios han estado fuera del ejido; no han desempeñado trabajos colectivos y no han asistido a las asambleas celebradas en el núcleo de población desde hace más de cuatro años. Es de remarcarse, que con lo testificado por ***** , se acredita: Que los ejidatarios separados, desde hace aproximadamente ocho años no viven en el mencionado ejido; no han asistido a las asambleas; no participaron en las actividades que se llevaron a cabo en el ejido cuando se formaron los ocho grupos de trabajo en las tierras de uso común; no participan en ninguna de las actividades que se efectúan en el núcleo de población y que no tienen ganado pastando en las parcelas que les fueron asignadas. Por lo tanto, es incontrovertible que con dichos atestos quedan mostrados

los hechos y omisiones que la asamblea consideró para separar del ejido a ***** y a los otros ejidatarios. Las testificaciones en mención y el interrogatorio correspondiente obran de la foja 103 a la 106 y 109, el resultado del referido medio de convicción, hace prueba plena de conformidad a lo establecido por el numeral 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria.

Además, es de explorado derecho que la asamblea como órgano supremo del ejido, tiene facultades para separar a los ejidatarios cuando hayan abandonado por más de cuatro años el cultivo que les correspondía en la explotación, colectiva de las tierras del ejido al que pertenezcan y según quedó demostrado, la asamblea tomó en consideración para separar a dichos ejidatarios, que habían abandonado el núcleo de población desde hace aproximadamente ocho años, tiempo en el que también abandonaron cultivo que les correspondían en la explotación colectiva de la tierra ejidal. Por ende, debe tenerse que el acuerdo de asamblea con que se separó del ejido a los referidos ejidatarios, no se hizo contraviniendo a la ley agraria, sino de conformidad a lo dispuesto en la fracción II de su artículo 23.

El criterio preinserto con antelación, es sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en su tesis bajo el rubro:

ASAMBLEAS DE EJIDATARIOS, FACULTADES DE LA. PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA SEPARACION DE LOS EJIDATARIOS DEBE APOYARSE EN PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL ABANDONO DE TIERRAS. Panparo directo 202/94 José Luis Arias Arellano. 24 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. - Ponente: Faustino Cervantes León. Secretaria: Nora María Ramírez Pérez.

Fuente: Tribunales Colegiados de Circuito. Semana Judicial de la

Federación. Epoca 8ª, vol. Tomo XIV -septiembre 1994, pág. 269. Tesis o Clave 18 A. . . .

En este párrafo es pertinente asentar, que es verdad que de la foja 113 a la 116, obran cuatro facturas números 5442, 5443, 5445 y 5448, de fechas veinte, veintiuno de enero y diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, así como del cinco de octubre de mil novecientos

noventa y tres, expedidas por Toribio Soto G. , Jefe de Manzana de El Carrizo, municipio de Guanaceví, Estado de Durango, en las que se encuentra asentado que ***** , ***** , ***** , adquirieron por compraventa de diversos teñedores, becerras de diferentes colores. Con el contenido de dichos medios de convicción, solo Demuestra que a los compradores se les transmitió la propiedad, de dichas becerras, hecho este que aún demostrado, es insuficiente para carab ar el sentido de la sentencia que se emite, pues no se acredita con ningún otro medio de prueba, el destino que se haya dado al mencionado ganado vacuno, pues es posible que compradores los hayan trasladado al lugar en que viven fuera del ejido o a otro. De todo lo razonado fundado y motivado con antelación, se resume que la parte accionante, con ningún medio probatorio acredita que el acuerdo de la asamblea aludida contravenga a la Ley Agraria.

Así las cosas y siendo de explorado derecho, que la Ley ordena que la parte demandante debe demostrar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que cuando no los prueba tal y como acontece en la especie, su acción no puede prosperar , independiente de que la parte demandada haya o no opuesto defensas y excepciones. Criterio éste que comparte y sostiene nuestro más alto Tribunal en sus tesis bajo el rubro :

" . . . ACCION PRUEBA DE LA. Sexta Epoca, página 30 Volumen ^VII, Tercera Sala, Cuarta Parte, Apéndice 1917-1975. . . " .

Por los razonamientos ampliamente fundados y motivados , debe tenerse por incomprobada la acción principal intentada por la parte actora, razón por la que deberá absolverse a la asam-blea demandada, de las prestaciones que le fueron reclarnadas con motivo de la citada acción.

SEXTO . - Por otra parte, es menester asentar que la acción reconvencional de controversia en materia agraria, promovida por ***** , *****y ***** , Presidente, Secretario Suplente y Tesorero respectivamente del comisariado ejidal , del núcleo de

población denominado " *****" ubicado el Municipio de Guanaceví , Estado de Durango, en su carácter de órgano representante de la asamblea actora reconvencionista, en contra de los reconvenidos ***** , ***** , ***** Y ***** , se encuentra prevista en la fracción VI, del artículo 18, de la Ley ' Orgánica de los Tribunales Agrarios -

Según se desprende del contenido del escrito reconvencional , de la contestación del mismo y de contestación a la reconvención, así como de la audiencia de ley", que obran de la foja 39 a la 43 , 83 a 86, 94 a 107, 117 y 118, la litis en la acción referida, se constriñe en que este Tribunal, determine si son procedentes o no las pretensiones reclamadas por la asamblea actora reconvencional , consistentes : en que se resuelva sobre el cumplimiento del acuerdo de la asamblea de fecha dos de febrero del presente año , celebrada en el ejido " *****" del Municipio de Guanaceví , Estado de Durango , relativo a la separación como ejidatarios de los hoy actores en la acción principal y reconvenidos en esta acción y si los derechos agrarios de los ejidatarios separados, deben quedar a nombre del ejido. También, se circunscribe en si deben cancelarse o no los ratificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, expedidos en favor de los antes mencionados por el Registro Agrario Nacional.

SEPTIMO.- Del análisis de las constancias procesales que obran en los presentes autos , el suscrito jurisdicente llega a la convicción plena de que la asamblea demandante , demuestra plenamente la procedencia de su acción y de las prestaciones que le reclama a su contraparte , ello es así, acorde a los razonamientos fundados y motivados a continuación : Como quedó demostrado plenamente segundó al quinto de esta resolución, acción, consistente en el febrero del año en curso, del municipio de Guanaceví, Estado de Durango, que obra a fojas 45, 46 y 47, hace prueba plena, acorde a lo dispuesto por el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, con la que se demuestra fehacientemente, que de conformidad a

las atribuciones que le confiere la fracción II del numeral 23 de la Ley Agraria, por ser % de su competencia, la asamblea celebrada en el ejido aludido en la fecha invocada, por mayoría -de votos acordó separar del núcleo de población a los ejidatarios *****, ***** y que sus derechos agrarios quedaran a nombre del ejido. Según se advierte de autos, la asamblea para tomar esa determinación, tuvo en consideración la solicitud que por escrito le hicieron en ese sentido dieciocho ejidatarios, documento que obra a foja 48 y tomó en cuenta para ello: Que ***** y los otros ejidatarios han estado fuera del ejido; no han desempeñado trabajos colectivos y no han asistido a las asambleas celebradas en el núcleo de población desde hace más de cuatro años . Es de remarcarse, que con lo testificado por *****, se acredita: Que los ejidatarios separados, desde hace aproximadamente ocho años no viven en el mencionado ejido; no han asistido a las asambleas; no participaron en las actividades que se llevaron a cabo en el ejido cuando se formaron los ocho grupos de trabajo en las tierras de uso común; no participan en ninguna de las actividades que se efectúan en el núcleo de población y no tienen ganado pastando en las parcelas que les fueron designadas. Por lo tanto, quedan demostrados los hechos y omisiones que la asamblea consideró para separar del ejido a ***** y a los otros ejidatarios. Los mencionados atestos y el interrogatorio correspondiente obran de la foja 103 a la 106 y 109, el resultado del referido medio de convicción hace prueba plena de conformidad a lo establecido por el numeral 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia Agraria. Luego entonces, se debe tener a la parte reconvencional demostrando plenamente la procedencia de la acción, al quedar acuerdo de la asamblea contraviene a la Ley Agraria, por ende, este Tribunal debe declarar que es procedente, que se dé cumplimiento al acuerdo de la asamblea celebrada en el ejido aludido, el dos de febrero del año en curso; por lo tanto, se debe condenar a los reconvencidos a las prestaciones que le reclama la parte actora.

OCTAVO. - Es de tomarse en consideración, que según se desprende de autos, los demandados *****, ***** no ofrecieron ningún medio probatorio para demostrar sus defensas en la acción reconvencional. Incluso, tal y como se demuestra en los considerandos del segundo al quinto de esta resolución, con el resultado probatorio de los medios de convicción ofrecidos por los antes mencionados en la acción principal, no desvirtúan los medios probatorios con los que su contraparte demuestra plenamente que el acuerdo de la asamblea invocada no contraviene a la Ley Agraria. Cabe abundar, que si bien es cierto que los reconvenidos, es su escrito que obra a fojas 117 y 118, manifiestan como defensas: que jamás han abandonado el ejido; que no han incumplido con las tareas o faenas que realiza el ejido y que si han asistido a algunas asambleas . . . " . Con ningún medio probatorio idóneo acreditan su versión es ese sentido, puesto que contrariamente a lo aseverado por la parte demandada, con lo testificado por los CC. *****, se desvirtúan dichas aseveraciones. En efecto dichos testigos expresaron que saben y les consta:

„. . . Que *****, ***** , desde hace aproximadamente ocho años no viven en el ejido " *****" del Municipio de Guanaceví, estado de Durango; que no han asistido a las asambleas que se celebran en el mencionado núcleo de población y que no se presentaron a la asamblea el citado ejido el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y tres; que no participaron en las actividades que se llevaron a cabo en el ejido cuando se formaron los ocho grupos de trabajo; que desde hace aproximadamente ocho años, no participan en ninguna de las actividades que el mencionado núcleo de población las parcelas que se les asignó...”

Dichos atestos y el interrogatorio correspondiente obran de la foja 103 a la 106 y 109, el resultado del mencionado medio de convicción, hace prueba plena de conformidad a lo establecido por el numeral 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria.

Así las cosas, se debe tener que los reconvenidos no acreditan los hechos constitutivos de sus pretensiones relativos a sus defensas y

acorde a lo establecido por el artículo 187 de la Ley Agraria, es a las partes a quienes corresponde asumir la carga de la prueba. Ni desvirtuaron los hechos de la acción reconvencional plenamente comprobados por su contraparte, por lo tanto, se debe declarar que la asamblea del ejido "*****", del Municipio de Guanaceví, Estado de Durango, demostró plenamente su acción de controversia en materia agraria y las prestaciones que le reclama a los reconvenidos. por ende, este Tribunal debe declarar que es procedente, que se dé cumplimiento al acuerdo de la asamblea celebrada en el ejido aludido, el dos de febrero del año en curso; por lo tanto, se tiene por separados del núcleo de población en mención a los ejidatarios *****; así mismo, se debe ordenar remitir al Registro Agrario Nacional, copia certificada de esta resolución para su inscripción; también, para que dé de baja como ejidatarios a los antes mencionados, cancele los certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común que se expidieron en favor de los mencionados reconvenidos y para que extienda dichos certificados en favor del ejido "*****", del municipio de Guanaceví, estado de Durango.

NOVENO. Cabe señalar en este considerando, que las pruebas no valoradas ofrecidas por las partes, resultan irrelevantes en el caso, pues no obstante que fueron analizadas y valoradas en conciencia por este Tribunal, en términos de lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Agraria, el resultado de dicho análisis y valoración nos lleva a la convicción de que no desvirtúan las consideraciones que anteceden en las que se estudió la acción que nos ocupa y tampoco influyen de manera substancial en el sentido de la propia sentencia, debido a lo cual se hace innecesario plasmarlo en la misma, en mérito de economía procesal, siendo aplicable al respecto, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 169-179, página 258, que es del tenor literal siguiente:

...PRUEBAS QUE NO INFLUYEN EN EL SENTIDO DE FALLO. FALTA DE ESTUDIO DE. NO AGRAVIO. La omisión de la autoridad responsable, en la sentencia reclamada, de analizar determinadas probanzas ofrecidas por la defensa, que se desahogan en el período de instrucción, como resultan ser declaraciones de testigos, inspección ocular y reconstrucción de hechos, carece de relevancia jurídica, si tales elementos de pruebas no alcanzan a producir la modificación de la citada sentencia. " .

Por lo antes expuesto y fundado, siguiendo los lineamientos de seguridad jurídica y legalidad, consagrados en la Constitución General de la República, 163, 1/64, 167, 170, 171, 172, 186, 187, 189 y demás relativos de la Ley Agraria, 18, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se;

RESUELVE

PRIMERO. Por los razonamientos fundados y motivados en los considerandos del segundo al quinto y noveno, de esta resolución, los actores ***** , no demostraron la procedencia de su acción principal de nulidad de actos que contravienen las leyes agrarias , relativa a la nulidad del acuerdo tomado por la asamblea celebrada el dos de febrero mil novecientos noventa y siete, en el ejido denominado " *****", ubicado en el Municipio de Guanaceví, Estado de Durango; por ende, se absuelve a la asamblea demandada de las prestaciones que les fueron reclamadas con motivo de dicha acción.

SEGUNDO.- Por los razonamientos fundados y motivados en los considerandos del sexto al noveno de esta resolución, la asamblea del ejido denominado " *****" ubicado en el Municipio de Guanaceví, Estado de Durango, demostró plenamente la acción reconvencional de controversia en

materia agraria; por ende, este Tribunal debe declarar que es procedente, que se dé cumplimiento al acuerdo de la asamblea celebrada en el ejido aludido, el dos de febrero del año en curso; por lo tanto, se tiene por separados del núcleo de población en mención a los ejidatarios reconvenidos ***** .

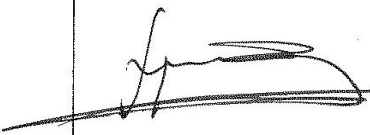
TERCERO. Remítase al Registro Agrario Nacional, copia certificada de esta resolución para su inscripción; también, para que dé de baja como ejidatarios a los reconvenidos mencionados en el resolutivo anterior, cancele los certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común que se expidieron en favor de los antes mencionados y para que extienda dichos certificados en favor del ejido " *****" del municipio De Guanaceví, estado de Durango.

Notifíquese personalmente a las partes esta resolución, cúmplase y en su oportunidad, archívese expediente como definitivamente concluido. Entréguese a la asamblea invocada por conducto del órgano de representación ejidal , el libro de actas que se tuvo a la vista al resolver, previa copia certificada que se deje del mismo en los presentes autos .

Así lo resolvió y firma el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito LICENCIADO FRANCISCO M. HERNÁNDEZ BÁEZ, ante la Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA OLIVIA RASCÓN CARRASCO, quien autoriza y da fe.

FMHB'ORC'MCP'esh'lsf.-

 TRIBUNALES AGRARIOS	Concepto	Dónde:
	Fecha de clasificación	Sesión Séptima Ordinaria del 09 de julio 2024
	Área	LICENCIADO BENJAMÍN ARELLANO NAVARRO. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 7

	Información confidencial	<p>Se eliminaron los nombres de los actores de las páginas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.</p> <p>Se eliminaron LOS nombres de los demandados de las páginas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 y 23.</p> <p>Se eliminaron datos relacionados con números de parcelas o números de certificados parcelarios de las páginas: 3, 4 y 10.</p> <p>Se eliminaron los nombres de los testigos de las partes de las páginas: 3, 4, 11, 13, 15, 19 y 20.</p> <p>Se eliminaron dos nombres de ofendidos de la página: 5</p>	
	Fundamento legal	<p>Artículo 113 fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas</p>	
	Rubrica del titular de área		

'mvvc



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

DE DISTRITO EN
E MEXICO

~~388~~ 00 297
297

EXPEDIENTE: TUA/10°DTO./(N)232/97

ACCION: NULIDAD DE ACTOS Y
DOCUMENTOS

POBLADO: [REDACTED]

MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUAREZ

ESTADO: MEXICO

Naucaupan de Juárez, Estado de México, a quince de enero de
mil novecientos noventa y nueve.

V I S T O para dictar resolución en el expediente
número **TUA/10°DTO./(N)232/97**, relativo a la demanda que
presentó [REDACTED] promoviendo en
nombre y representación de [REDACTED] en
contra de **LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS**, del ejido [REDACTED]
[REDACTED] del Municipio de Naucalpan de Juárez,
Estado de México, de quien reclama la nulidad del acuerdo de
asamblea de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos
noventa y cinco, respecto de la separación de ejidatario del
[REDACTED] y de [REDACTED], y

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Por escrito de fecha dieciséis de mayo de
mil novecientos noventa y siete, el señor [REDACTED]
[REDACTED] en nombre y representación de [REDACTED]
[REDACTED] demandó de la Asamblea General de
Ejidatarios del poblado en cuestión a través de sus órganos de
representación las siguientes prestaciones: a).- De este H.
Tribunal, la declaración jurisdiccional en el sentido de que es
nulo el acuerdo de asamblea general de ejidatarios de fecha
[REDACTED],
respecto de la separación de ejidatario del [REDACTED]



TRIBUNAL JUDICIAL AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

[REDACTED]; b).- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se le reconozca su calidad de ejidatario a [REDACTED] quien ha realizado su traslado de dominio ante el Registro Agrario Nacional con fecha [REDACTED] [REDACTED] (por haber sido designado como sucesor preferente por el señor [REDACTED] [REDACTED] c).- De la asamblea general de ejidatarios de [REDACTED] [REDACTED] el reconocimiento de su calidad de ejidatario de [REDACTED] por estar debidamente registrado como tal ante el Registro Agrario Nacional. d).- De la misma asamblea general de ejidatarios, el pago por concepto de indemnizaciones a favor de [REDACTED] desde el [REDACTED] hasta la actualidad, indemnizaciones que ha recibido el ejido de [REDACTED] [REDACTED] con motivo de diversas expropiaciones sufridas. e).- De la misma asamblea general de ejidatarios, la nulidad del acuerdo tomado en asamblea general de ejidatarios de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en la que se separa como ejidatario al [REDACTED] [REDACTED]. Funda su demanda en los siguientes hechos: 1.- Bajo protesta de decir verdad, manifestó que el día veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y dos, el Presidente de la República expidió a favor de [REDACTED] el certificado de derechos agrarios número [REDACTED] con el cual se le reconoció [REDACTED] del poblado denominado [REDACTED] Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, hechos que se acreditan con el certificado



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO./ (N) 232/97.

UNDO DE STRIT ER
10 DE MAYO
PAN DE AZÚCAR

respectivo. 2.- Que con fecha [REDACTED]

[REDACTED] tal y como se comprueba con el acta número [REDACTED] de fecha [REDACTED]

3.-

Asimismo, hasta el día veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, aún se encontraban vigentes los derechos agrarios de [REDACTED] tal y como se comprueba con la constancia de vigencia de derechos agrarios individuales en ejidos, expedida por la Directora en Jefe del Registro Agrario Nacional en la fecha antes indicada, consecuentemente, dicho ejidatario aún se encontraba listado en el padrón de ejidatarios como se puede apreciar en dicho padrón de fecha [REDACTED]

[REDACTED] 4.- Como se puede apreciar en los documentos ya exhibidos desde el momento en que le fue reconocida la calidad de ejidatario a su [REDACTED]

[REDACTED] nombró como sucesores de sus derechos agrarios a su poderdante [REDACTED] en primer grado, a [REDACTED] y finalmente a [REDACTED]

herederos y grados que se mantuvieron hasta su fallecimiento y ante tal suceso, su poderdante con fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, a través de la solicitud número [REDACTED] gestionó la inscripción de la transmisión de los derechos agrarios por sucesión; en virtud de que como ya se dijo, se encontró debidamente legitimado como sucesor preferente para heredar los derechos agrarios del extinto titular, causando baja [REDACTED] y dándose de alta a su poderdante [REDACTED], como se



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

aprecia en la constancia respectiva de fecha [REDACTED]
[REDACTED] expedida por el Registro Agrario
Nacional y que se adjuntan a este documento bajo el número [REDACTED];
trámite que se llevó con todas las formalidades esenciales del
procedimiento que prevén los artículos 17, 152 fracción VIII y
demás relativos de la Ley Agraria y 74 del Reglamento Interior
del Registro Agrario Nacional, quedando debidamente inscrito
bajo el [REDACTED]. 5.- Ahora bien, ya
una vez que su poderdante se había adjudicado los derechos
agrarios de [REDACTED] y se encontraba reconocido
como [REDACTED] al querer asistir a la asamblea de ejidatarios, se
le indicó que estaba totalmente impedido para ingresar e
incluso a participar de cualquier beneficio relacionado con el
ejido, en virtud de que en la asamblea general de fecha
[REDACTED] la
asamblea determinó separar a [REDACTED]
[REDACTED] y solicitó a la misma asamblea proceder a cancelar
dicho certificado, determinación que se corrobora con el acta
de asamblea general de ejidatarios antes fechada y que se
adjunta a este escrito como anexo, la cual es materia de este
juicio, ante tal circunstancia el suscrito compareció en su
carácter de poderdante a una audiencia conciliatoria ante la
Procuraduría Agraria con residencia en el Municipio de
Naucalpan, Estado de México, el día doce de agosto de mil
novecientos noventa y seis, manifestando categóricamente en
cuanto a que se refiere al comisariado ejidal que su poderdante
había sido separado del ejido, según el acta de asamblea de



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

fecha [REDACTED]

exhibiendo en el acto tal documentación, hechos que se corroboran con el acta de comparecencia del día doce de agosto de mil novecientos noventa y seis, que se adjuntan en este escrito como anexo. 6.- Ahora bien, cabe señalar que el acta de asamblea general de ejidatarios que se combate en el presente juicio se encuentra viciada, toda vez que se está privando a su poderdante del derecho que le confiere la Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley Agraria actual en sus artículos 12, 14, 16 y 17 y demás relativos del cuerpo legal, y si bien es cierto que en el Reglamento Interior del núcleo agrario en cita se prevé como sanción en su artículo 21 la separación del ejidatario del núcleo mismo por más de tres faltas consecutivas, también es cierto como se puede apreciar en dicho reglamento, que éste entró en vigor hasta el día tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco, según se puede apreciar en la certificación de inscripción realizada por el registrador del Registro Agrario Nacional, en la cual el ejidatario multicitado había fallecido ya cuatro años antes y en consecuencia resulta inaplicable dicho ordenamiento, aunado a lo anterior cabe precisar que se está privando de un derecho que la misma ley consagra en beneficio de su poderdante como ciudadano común y como ejidatario, pues contrario a lo señalado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; indebidamente se le está privando de su derecho sin que para ello medié juicio alguno, máxime que en ningún momento fue notificado personalmente

E AGRARIO
AUCALPAC



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO./ (N) 232/97.

ESTADO DE DISTRITO EN
J. DE MEXICO
N. DE JUAREZ

para la asistencia y defensa de sus derechos. En mérito a lo anterior, debe decirse que el acta de asamblea que se combate no se ajusta a los preceptos legales invocados a la vez que en ésta no se cumple con las formalidades de un procedimiento, además que por [REDACTED] es improcedente la separación del ejidatario y más aún de sus sucesores, pues el hecho de no haber gestionado el traslado de dominio a favor de su poderdante no es motivo ni causa suficiente para separar a un ejidatario del núcleo, razón ésta además lógica legal puesto que ni su poderdante ni el extinto titular diera causa suficiente y bastante para ser separados del precitado núcleo agrario. Cabe indicar que si bien es cierto en el núcleo agrario multicitado no existen parcelas para usufructuar, también es cierto que los ingresos por aportaciones e indemnizaciones a favor del ejido, tanto municipales como estatales, son prodigiosos beneficios que su poderdante ha dejado de recibir por dicha separación, por lo que solicita a este Tribunal le sean reivindicados y toda vez que ha quedado evidenciada la injusta separación del ejido de su poderdante. Ofrece como pruebas de su parte las siguientes: 1.- Oficio de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, signado por el Subdirector de Normas para el Registro de Tierras del Registro Agrario Nacional, (foja 23). 2.- Constancia de registro de derechos agrarios individuales en ejidos de fecha [REDACTED], a nombre de [REDACTED], (foja 24). 3.- Solicitud para la inscripción de la transmisión de derechos de fecha [REDACTED]



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO./ (N)232/97.

0 DE DISTRITO EN
DE MEXICO

[REDACTED] 4.-

Inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión de fecha [REDACTED]

5.- Copia certificada del acta de defunción de [REDACTED]

[REDACTED], expedida el [REDACTED]

[REDACTED] 6.- Copia certificada de la

escritura notarial [REDACTED] pasada ante la fe del Cónsul General de México en Dallas, Texas, RAMON XILOTL RAMIREZ, de fecha [REDACTED]

[REDACTED] 7.-

Copia simple de la primera convocatoria para llevar a cabo la asamblea de [REDACTED]

[REDACTED] 8.- Copia simple del acta de asamblea general

de ejidatarios de [REDACTED]

[REDACTED] 9.- Solicitud para que se gire

oficio al FIFONAFE a fin de que informe a este Tribunal respecto de todas las expropiaciones que ha sufrido el ejido en cuestión,

así como el monto de las indemnizaciones. 10.- Confesional a

cargo de los Integrantes del Comisariado Ejidal y 11.- Testimonial

a cargo de dos personas que se comprometió a presentar

cuando este Tribunal se lo requiriera.

Mediante proveído de treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, se ordenó girar oficio al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para que informará a este Tribunal de las expropiaciones que se han hecho en el ejido en cuestión, así como el monto de las indemnizaciones que por tal concepto obren en esa institución (foja 30).



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

10° DE DISTRITO EN
DE MEXICO
DE JUAREZ

Por oficio número DAJ-DJC-1029/97 el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, envió a este Tribunal la información requerida, (fojas 32 a 59) y mediante proveído de fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, (foja 60).

Mediante escrito presentado ante Oficialía de Partes de este Tribunal por [REDACTED] el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, solicitó a este Tribunal que requiriera información complementaria al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, respecto del período comprendido del primero de enero de mil novecientos ochenta y tres a la fecha, (foja 65).

TTA



PR ACQU

MEXICAL

Por acuerdo de nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal acordó en el sentido de que el promovente aclarara y precisara cual es el objeto de pedir la información que señala a FIFONAFE, señalándole que muchos de los puntos que requiere no corresponde proporcionarlos a dicha institución, (foja 66).

Por escrito de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, [REDACTED] señaló que el objeto de requerir la información solicitada a FIFONAFE es para determinar el monto de lo recibido por el ejido



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

IDO DE DISTRITO EN
en cuestión
N DE JUAREZ
(foja 67).

por el concepto de pago de remanentes en el ejido,

Por proveído de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal acordó al promovente que de acuerdo con el artículo 187 de la Ley Agraria las partes deberán asumir la carga de la prueba de sus hechos constitutivos de sus pretensiones; en tal virtud deberá acudir el promovente a solicitar personalmente los documentos que menciona ante las autoridades correspondientes; y si éstas niegan la expedición de tales documentos entonces el Tribunal las solicitará, (foja 70).

Mediante acuerdo de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por admitida a trámite la demanda intentada por el señor [REDACTED] representante legal de [REDACTED] se ordenó emplazar a los demandados a través de sus órganos de representación, y se fijó como fecha para la audiencia de ley el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho (fojas 71 y 72).

Fueron emplazados los integrantes del comisariado ejidal del poblado en cuestión el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho (fojas 75 y 76).



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

) DE DISTRITO EN
DE MEXICO
DE JUAREZ

SEGUNDO.- En la audiencia de ley de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho, (fojas 77 a 124), la parte actora por conducto de su abogado patrono en dicha diligencia ratificó en todas y cada una de sus partes su escrito inicial de demanda ofreció como pruebas para acreditar las pretensiones de su representado las que se relacionan en el capítulo respectivo del propio escrito inicial de demanda, así como la confesional a cargo de los integrantes del comisariado ejidal del poblado en cuestión y la testimonial a cargo de por lo menos dos testigos. En la precitada diligencia la parte demandada por conducto de su abogado patrono y en los términos del escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el día de la fecha, dio contestación a la demanda formulada en su contra, negando el derecho de la parte actora respecto de todas y cada una de sus prestaciones, respecto de los hechos, del número uno al cuatro ni los afirmó ni los negó por no ser hechos propios y respecto del hecho número cinco contestaron que es parcialmente cierto ya que mediante comparecencia de doce de agosto de mil novecientos noventa y seis ante la Procuraduría Agraria se hizo saber al actor la separación del ejido de [REDACTED] mediante asamblea de [REDACTED] [REDACTED] y nunca se le reconoció la [REDACTED] en relación al hecho número seis manifestaron que es totalmente falso, además de aclarar que el último pago en favor del ejido en cuestión, se hizo en enero de 1991, siendo partícipe del mismo el señor [REDACTED] opuso como



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.DE DISTRITO EN
EL DISTRITO DE
MEXICO

excepciones y defensas la falta de acción y la falta de personalidad y ofreció pruebas de su parte: 1.- Cédula de notificación y primera convocatoria a la Asamblea General de fecha [REDACTED]

[REDACTED] 2.- Reglamento Interior del Ejido del poblado en cuestión que entró en vigor desde el [REDACTED]

[REDACTED] 3.- Copia simple del acta de asamblea de [REDACTED]

[REDACTED] 4.- Confesional a cargo de [REDACTED]

[REDACTED] y 5.- Testimonial a cargo de dos testigos. Y en virtud de que en el punto número dos de prestaciones la parte actora manifestó que [REDACTED]

ha realizado a su favor traslado de dominio ante el Registro Agrario Nacional con fecha [REDACTED]

[REDACTED] por haber sido designado sucesor preferente por [REDACTED] titular del certificado

parcelario número [REDACTED] este Tribunal ordenó girar oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que le remitiera informe pormenorizado en relación con el historial agrario del certificado parcelario antes mencionado y se señaló el [REDACTED]

[REDACTED], para continuar con la celebración de la audiencia.

Mediante oficio número SR/DAJ/3484/98, de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el Delegado del Registro Agrario Nacional envió su informe a este Tribunal respecto del presente juicio (foja 132).



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

12

00-308

308

~~100~~

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

DE DISTRITO EN
E MEXICO
JUAREZ

En audiencia de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho (fojas 134 a 139), el asesor legal del comisariado ejidal (demandado) se desistió de la prueba testimonial ofrecida en su perjuicio y toda vez que ofreció la confesional para que fuera desahogada personalmente por [REDACTED] se difirió la audiencia para el veinticuatro de agosto de ese mismo año, ya que la misma no podría ser desahogada a través de su representante, ordenándose citar personalmente a [REDACTED]

Mediante escrito presentado por [REDACTED] en la oficialía de partes de este Tribunal, exhibió un informe que le proporcionó el Delegado del Registro Agrario Nacional mediante el oficio número SR/DAJ/4337/98 (fojas 142 y 143).

Mediante oficio número 42486, enviado por el Jefe del Estado Mayor Presidencial, de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, envió a este Tribunal documentación relacionada con el pago indemnizatorio realizado en día [REDACTED] a las autoridades del ejido en cuestión, derivado de la expropiación de una superficie de [REDACTED] del poblado de referencia (fojas 147 a 156).



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

13

00-309

107

309

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

DE DISTRITO EN
E MEXICO
E JUAREZ

Mediante diligencia de catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, (foja 166), se levantó razón actuarial relativa a la notificación de [REDACTED] por conducto de su representante legal [REDACTED] quien manifestó que la persona citada radica en los Estados Unidos y que lo trataría de localizar.

En audiencia de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho (fojas 167 a 176), se desahogó la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo de los integrantes del comisariado ejidal, quienes la desahogaron a través de su presidente [REDACTED], así como la confesional ofrecida por la misma a cargo de [REDACTED] y se ordenó citar de nueva cuenta a [REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] para que se presentara a este Tribunal a absolver posiciones que previamente este Tribunal calificará de legales, apercibido de que de no hacerlo se le tendrá por confeso de las mismas, señalándose el catorce de septiembre de ese mismo año para la continuación de la audiencia y estando presente [REDACTED] apoderado legal de [REDACTED] se le notifica que deberá presentarse el día mencionado, a efecto de que comparezca personalmente [REDACTED] a absolver posiciones o persona que acredite ante este Tribunal estar autorizada para absolverlas conforme a la Ley.



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

14

00 210

310

402

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

DE DISTRITO EN
DE MEXICO
DE JUAREZ

Mediante escrito presentado por [REDACTED]

[REDACTED] en la oficialía de partes de este Tribunal, el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, anexó documentación complementaria (fojas 177 a 184).

En audiencia de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, [REDACTED] exhibió Poder General Amplísimo otorgado en su favor por [REDACTED] pasado ante la Fe del Notario Público número 147, LICENCIADO RAUL VALERA ELIZONDO, en el cual se le otorga poder entre otras cosas para absolver y articular posiciones, desahogando en dicha diligencia la prueba confesional ofrecida por la parte demandada a cargo del Representante Legal de [REDACTED] asimismo este Tribunal acordó tener por recibido el escrito presentado por el actor, en el que exhibió diversos documentos, dando vista a su contraparte para que manifestara lo que a su interés conviniera (fojas 185 a 253).

Mediante escrito de fecha catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho [REDACTED] solicitó a este Tribunal que requiriera a ciertas Dependencias la información que él ya había solicitado con antelación, con el que se dio vista a su contraparte para que manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 257 a 270).



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

15

00-911

311

~~403~~

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

0 DE DISTRITO EN
DE MEXICO
DE JAREZ

Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, [REDACTED] por el que exhibió dos oficios en los que solicita información al Gobierno del Estado de México, a lo que el Tribunal acordó dar vista a su contraparte para manifestar lo que a su derecho conviniera (fojas 271 a 278).

Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, [REDACTED] presidente del Comisariado Ejidal del poblado en cuestión desahogó la vista que se le mandó dar en audiencia de catorce de septiembre de ese mismo año, manifestando que objetaba en toda y cada una de sus partes las documentales ofrecidas por la parte actora toda vez que las mismas no tiene relación con la litis del presente juicio (fojas 279 a 280).

Mediante oficio número DGJC/DAJ/202/132/4641/98, presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el Director General Jurídico y Consultivo del Gobierno del Estado de México, envió la información relacionada con el presente juicio (fojas 281 a 286).

Mediante escrito presentado por [REDACTED]
[REDACTED] el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10° DTO./ (N)232/97.

DE DISTRITO EN
DE MEXICO
EJIDO

ocho, en el que solicitó a este Tribunal que requiriera al comisariado ejidal del poblado en cuestión para que le informara respecto de las cantidades que se han pagado a cada ejidatario en lo particular de mil novecientos noventa y uno a la fecha, en relación con las expropiaciones que ha sufrido el ejido citado, toda vez que no ha sido posible reunir toda la información referente a dichas expropiaciones, aún cuando lo ha solicitado a diversas Instituciones del Gobierno Estatal y Federal, a lo que el Tribunal acordó que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que en el presente asunto la litis versa sobre la nulidad del acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios de fecha [REDACTED] y en su caso el reconocimiento de la calidad e ejidatario sucesor a favor de [REDACTED] y toda vez que ya se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, se otorgó un término de tres días a las mismas, para que formularan sus alegatos (fojas 289 a 290).

Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho la [REDACTED] abogado patrono de la parte actora en el presente juicio, solicitó de nueva cuenta la información requerida con antelación e hizo diversas aclaraciones, a lo que el Tribunal acordó sin lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que por acuerdo de treinta de noviembre de ese año se vio por terminada la etapa de pruebas y se abrió el plazo



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

DE MEXICO
DE JUAREZ

para que las partes formularan sus alegatos, mismo que ya había fenecido sin que lo hicieran por lo que en consecuencia se tuvo por perdido su derecho y se ordenó turnar los autos a la Secretaría de Estudio y Cuenta para elaborar el proyecto de resolución correspondiente (fojas 291 y 292).

Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, [REDACTED] formulando su inconformidad en contra del acuerdo de once de diciembre de ese mismo año, en el que este Tribunal acordó teniendo por hechas las manifestaciones a que se contrae el promovente, aclarándole que el proveído de treinta de noviembre del año pasado, le fue notificado por rotulón el primero de diciembre del mismo año, en consecuencia se le tuvieron por formulados sus alegatos para los efectos legales correspondientes (fojas 293 a 296).

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción XIX de la Constitución General de la República; 1° y 163 de la Ley Agraria en vigor; 1°, 2° fracción II y 18 fracción VI de la Ley Orgánica de



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

18

00-314

314

400

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

DE DISTRITO EN
DE MEXICO

los Tribunales Agrarios; y con base en el acuerdo que establece distritos jurisdiccionales en la República, para la impartición de la Justicia Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que define la competencia territorial.

SEGUNDO.- En el presente juicio los demandados Integrantes del Comisariado Ejidal, fueron debida y legalmente emplazados para comparecer al mismo, como se advierte de las notificaciones que obran en autos a fojas 75 y 76.

TERCERO.- La litis en el presente juicio se constriñe en determinar, en términos de lo que dispone la fracción VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si procede o no la nulidad del acuerdo de asamblea de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por el cual se separó del ejido en cuestión al [REDACTED]

[REDACTED]

CUARTO.- De las pruebas aportadas por el actor [REDACTED] para acreditar su acción en este juicio, se hace el análisis y estimación de las siguientes: De conformidad con lo que disponen los artículos 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se les otorga valor probatorio a las siguientes documentales públicas: Oficio de fecha [REDACTED] dirigido a [REDACTED] signado por el



TRIBUNAL ELECTORAL AGRARIO

19

00-315

407

315

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

GO DE JUSTICIA EN
DE MEXICO

Subdirector de Normas para el Registro de Tierras, con el que se acredita que anexó al mismo constancia certificada del certificado de derechos agrarios número [REDACTED] a favor de [REDACTED] como integrante del poblado en cuestión.

Solicitud para la inscripción de transmisión de derechos agrarios de fecha [REDACTED]

[REDACTED] con la que se acredita que [REDACTED] solicitó la baja por [REDACTED] de [REDACTED] Constancia de Registro de Derechos Agrarios Individuales en Ejidos, expedida por el Registro Agrario Nacional el [REDACTED]

[REDACTED] con la que se acredita que [REDACTED] tiene sus derechos agrarios vigentes ya que por [REDACTED] fue dado de baja [REDACTED]

Constancia de inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión expedida el [REDACTED]

[REDACTED] por el Registro Agrario Nacional, con la que se acredita que [REDACTED] quedó como sucesor de [REDACTED]

[REDACTED] Copia certificada del acta de [REDACTED] de [REDACTED] expedida el [REDACTED]

[REDACTED], con la que se acredita que dicha persona [REDACTED] el [REDACTED]

[REDACTED] Copia certificada de la escritura [REDACTED] pasada ante la fe del Cónsul General de México en la Ciudad de Dallas, Texas, por medio de la cual [REDACTED]

[REDACTED] otorga poder amplio para pleitos y cobranzas y para administración de bienes a [REDACTED]

[REDACTED], con la que se acredita que el último es



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

E DISTRITO EN
MEXICO
JULIO

el representante legal del actor en el presente juicio. Oficio número SR/DAJ/4337/98 de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, en el que hace constar que [REDACTED]

[REDACTED] gestionó en su favor la transmisión de derechos agrarios por sucesión respecto de los derechos que correspondieron al [REDACTED] mismo que resultó procedente. Con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se otorga valor probatorio a las siguientes documentales: Copia simple de la primera convocatoria para llevar a cabo la asamblea de

[REDACTED] con la que se acredita que el punto cuatro de dicha asamblea es para tratar lo relativo al ejidatario [REDACTED] con certificado de derechos agrarios número [REDACTED] Copia simple del acta de asamblea general de ejidatarios de fecha

[REDACTED] con la que se acredita que en dicha asamblea se separó del ejido a

[REDACTED] De conformidad con lo dispuesto por los artículos 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles se otorga valor probatorio a la prueba confesional a cargo de los Integrantes del Comisariado Ejidal por medio del presidente del mismo, desahogada en audiencia de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, con la que se acredita que [REDACTED] fue separado del ejido después [REDACTED] De conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

21

00 317

3 17

~~409~~

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

se otorga valor probatorio a la prueba testimonial a cargo

[REDACTED] y [REDACTED]
desahogada en diligencia de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, con la que se acredita que conocieron a [REDACTED] quien era ejidatario, asimismo que conocen a [REDACTED] y que el ejido ha recibido pagos por concepto de expropiaciones.

QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por la parte demandada Integrantes del Comisariado Ejidal, para acreditar sus excepciones y defensas, se hace el análisis y estimación de las siguientes: De conformidad con lo que disponen los artículos 133 y 203 en relación con el 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se les otorga valor probatorio a las siguientes documentales privadas: Cédula de notificación y primera convocatoria a la asamblea general de fecha

[REDACTED], con la que se acredita que en dicha asamblea se trató la separación de [REDACTED]. Reglamento Interior del Ejido del poblado en cuestión que entró en vigor el [REDACTED]

[REDACTED] con el que se acredita que dicho reglamento fue aplicado al caso del ejidatario [REDACTED]

[REDACTED] De conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se otorga valor probatorio a la copia simple del acta de asamblea de [REDACTED]

[REDACTED] con la que se acredita que se trató lo relativo a la comprobación y aplicación de los fondos



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

22

00-318

318

~~410~~

EXPEDIENTE TUA/10° DTO./ (N)232/97.

ESTADO EN
MEXICO

comunes enviados por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, es de conformidad con los artículos 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le otorga valor probatorio a la prueba confesional desahogada en audiencia de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, con la que se acredita que [REDACTED] y [REDACTED] fueron separados del ejido en cuestión mediante Asamblea General de Ejidatarios de [REDACTED]

SEXTO.- En el presente caso el actor [REDACTED] en representación de [REDACTED] reclama de la Asamblea General de Ejidatarios la nulidad del acuerdo tomado el [REDACTED] y apoya su derecho señalando que es sucesor preferente de [REDACTED] titular del certificado de derechos número [REDACTED] así como la parte proporcional de las indemnizaciones que ha recibido el ejido en cuestión como consecuencia de diversas expropiaciones a partir de la muerte de su padre [REDACTED]

Los demandados Integrantes del Comisariado Ejidal manifestaron que el actor carece de toda acción y derecho para reclamarle la nulidad de la asamblea citada, toda vez que el acuerdo tomado en asamblea el [REDACTED] fue aplicado de acuerdo al



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

23

00-319

319

III

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

DE DISTRITO EN
E MEXICO

Reglamento Interno del Ejido que entró en vigencia el [REDACTED] y opone las excepciones de falta de acción y falta de personalidad.

Con las pruebas que aportó la parte actora, anteriormente analizadas y valoradas, acredita que es el sucesor preferente de su [REDACTED] respecto del certificado de derechos agrarios número [REDACTED] como lo acredita con la constancia de Registro de Derechos Agrarios Individuales en Ejidos expedida el [REDACTED]

[REDACTED] también acreditó que [REDACTED] el [REDACTED] como consta con la copia certificada expedida el [REDACTED]

[REDACTED] también probó que actualmente él tiene sus derechos agrarios vigentes como lo acredita en la constancia de Registro de Derechos Agrarios ya citada.

Con las pruebas que aportó la parte demandada anteriormente analizadas y valoradas, acredita que mediante Asamblea de [REDACTED]

[REDACTED] se determinó [REDACTED] a [REDACTED] manifestando que a tal situación se aplicó el Reglamento Interno del Ejido que entró en vigor el [REDACTED]



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

24

00-20

320

412

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.

[REDACTED] de acuerdo con el artículo 23 fracción II de la nueva Ley Agraria vigente, en relación con el artículo 21 inciso c) de dicho Reglamento, el cual reza lo siguiente: PARA TODO EJIDATARIO POR FALTA INJUSTIFICADA, SE LES SANCIONARA DE LA SIGUIENTE MANERA: C) TERCERA FALTA, SE LE SEPARA DEL EJIDO. Por otra parte el artículo 23 del mismo Reglamento indica: LOS NUEVOS TITULARES POR FALLECIMIENTO Y POR SUCESION SE LES ENTREGARA EL BENEFICIO, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTEN SU TRASLADO DE DOMINIO Y QUE HAYA PROCEDIDO O LO QUE LA ASAMBLEA ACUERDE, sin embargo se puede considerar que en el caso concreto no procedía la separación de AURELIO BETANCOURT y sus sucesores del ejido en cuestión, toda vez que si bien es cierto que es facultad de la Asamblea de Ejidatarios determinar sobre la aceptación o separación de los mismos, también lo es que las disposiciones que se encuentran incluidas en su Reglamento Interno no pueden sobrepasar las disposiciones de la Ley Agraria, es decir, en el artículo 20 de la misma se nos señalan las causas por las cuales puede perderse la calidad de ejidatario y en ningún momento se señala como causa que el ejidatario no asista a las Asambleas durante tres asambleas consecutivas sin causa justificada, además de que dicha Asamblea nunca fue registrada ante el Registro Agrario Nacional, por lo tanto, nunca causó efectos contra terceros de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Agraria vigente, tan es así, que dicho Registro expidió la constancia correspondiente a [REDACTED]

el [REDACTED]



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

[REDACTED] del presente juicio, es decir, un año después de que supuestamente ya había sido separado del ejido, por otra parte de autos se desprende según consta a fojas 147 a 156, que el ejido en cuestión recibió una indemnización de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de los cuales quedó pendiente de entregar su parte proporcional al [REDACTED]

En consecuencia procede declarar nulo el acuerdo de asamblea de fecha [REDACTED] [REDACTED] por la que se separó del ejido en cuestión a [REDACTED] así como que le sea entregada la parte proporcional de los cuatro millones que recibió el ejido en cita el [REDACTED] [REDACTED]

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 14, 16, 17, 27 fracción XIX Constitucionales, 163, 170, 185, 189 y demás relativos de la Ley Agraria; y 1°, 2° fracción II y 18 fracción VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; es de resolverse y se



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

EXPEDIENTE TUA/10°DTO./(N)232/97.

JUNDO DE DISTRITO
IO DE MEXICO
PAN DE JUAREZ**RESUELVE**

PRIMERO.- Ha procedido la vía intentada en la que la parte actora acreditó su acción; y el demandado no justificó sus excepciones y defensas; en consecuencia.

SEGUNDO.- Se declara procedente la demanda interpuesta por el señor [REDACTED] en representación de [REDACTED] en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del poblado de [REDACTED] Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

TERCERO.- Se declara nulo el acuerdo de asamblea de fecha [REDACTED]

[REDACTED] por el que se separó del ejido en cuestión a [REDACTED]

CUARTO.- Queda firme la designación de [REDACTED] como titular del certificado de derechos agrarios número [REDACTED] por [REDACTED] del [REDACTED]

QUINTO.- Se condena a la Asamblea General de Ejidatarios del poblado en cuestión para que a través de los



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

27

09 323

323

~~415~~

EXPEDIENTE TUA/10° DTO. / (N) 232/97.
DE DISTRITO
E. MEXICO
E. JUAREZ

Integrantes del Comisariado Ejidal, para que en el término de treinta días a partir de la notificación de la presente resolución entreguen a [REDACTED] la parte proporcional que le corresponde de los [REDACTED] que les fueron entregados por concepto de indemnización por la Secretaría de la Defensa Nacional el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

SEXTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario Nacional para su conocimiento, registro y cumplimiento, en términos del artículo 152 fracción I de la Ley Agraria, previo pago de los derechos correspondientes por la parte interesada.

SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente resolución a las partes interesadas, entregándoles copia de la misma; en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió y firma el C. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe.

ADJ*wog.*eng.